



**“Identidades colectivas en
construcción. El caso del Movimiento
26 de Junio. 2010-2014”**

**Autora: Laura Venturini
Director: Esteban Iglesias**

Escuela de Ciencia Política.
Rosario, octubre de 2015.

Facultad de Ciencia Política y
Relaciones Internacionales.
Universidad Nacional de Rosario.

Introducción.....	2
I. Perspectiva teórica.....	6
II. Análisis de contexto.....	16
a) Argentina.....	16
El Movimiento Piquetero.....	17
b) Rosario.....	25
III. Estudio de caso: M-26 /Frente Popular Darío Santillán.....	30
a) Antecedentes y origen.....	30
b) Consideraciones para el estudio de caso. 2010-2014: las transformaciones identitarias del Movimiento 26 de Junio.....	33
Primer momento. 2010/2011.....	35
-2012 como punto de inflexión.....	41
-2013-2014. Ante nuevos desafíos ¿Resignificación identitaria?.....	48
Reflexiones finales.....	59
IV. Bibliografía.....	62

Introducción.

Esta investigación parte de la preocupación de abordar las transformaciones en las configuraciones identitarias de los movimientos sociales, asumiendo que en los últimos años complejizan sus formas de intervenir y de construcción de la identidad. Los movimientos sociales, como el movimiento piquetero en Argentina, han nacido con características específicas influidos por determinado contexto. Frente al paso de los años el desafío se presenta en repensar los movimientos a la luz de las transformaciones sociales, políticas y culturales que configuran los nuevos escenarios.

Esta inquietud teórica implicó, en primera instancia, el estudio del concepto mismo de movimiento social. Desde los años 70, el desarrollo teórico sobre la acción colectiva ha encontrado cauce con el Enfoque de los Movimientos Sociales y la Teoría de la Movilización de recursos. Asimismo, desarrollos más recientes, han puesto el acento en la particularidad del contexto latinoamericano en la constitución de esta forma de acción colectiva. Se toma como referencia la riqueza de estos enfoques pero se traslada la mirada a procesos políticos más contemporáneos en el tiempo, que implican un desplazamiento de la estructura primogénita de los nuevos movimientos sociales.

En Argentina, el movimiento piquetero no escapa de estos cambios. En el 2001 se consolida esta forma de acción colectiva con los pilares identitarios del piquete, la asamblea, la construcción territorial y comunitaria y una fuerte diferenciación de instancias estatales o de organización política tradicional. Al hacer el ejercicio de analizar las organizaciones partes de este movimiento diez años después, se evidencia cómo en ellas se ha reconfigurado la identidad, reinventado las estrategias y constituido nuevas relaciones con lo estatal. Como factores explicativos de esta redefinición de las organizaciones aparecen como claves: la transformación del Estado y sus intervenciones en las diferentes dimensiones de la vida social a partir del proceso abierto en el 2003 con el Gobierno de Néstor Kirchner y la consecuente transformación del contexto y de la situación económica, social y laboral de la población y la necesaria profundización y diversificación de los debates internos de las organizaciones sociales.

En ese sentido, el desafío epistemológico de explicar este fenómeno a través de un análisis multidimensional -económico, político, cultural y social- requirió la combinación de las líneas teóricas con el fin de encontrar un encuadre que posibilite la investigación. Desde esta perspectiva, se ha elegido un estudio de caso que permita reflexionar sobre los condicionantes y variables que intervienen en la constitución de una organización social y en la forma en la que se construye la identidad dentro de ella. En ese sentido, este trabajo se centrará en el estudio del Movimiento 26 de Junio (M-26), dentro del Frente Popular Darío Santillán.

Las primeras preguntas que orientaron la investigación fueron: ¿Cuáles fueron las características identitarias? ¿Qué acciones tuvo el M-26? ¿Qué objetivos tenían las mismas? ¿Qué canales consideró legítimo para poder expresar demandas? ¿Qué tipo de articulación tuvo con el Estado? ¿A qué temáticas referían los posicionamientos públicos tuvo el M-26? ¿Qué transformaciones hubo en sus acciones y posicionamientos? ¿Qué factores afectaron a estos cambios? ¿Se ha complejizado la noción de Estado desde el M-26?

En diálogo con estos interrogantes el objetivo del trabajo se delimitó en *reconstruir el proceso identitario que establece el M-26 en el período 2010-2014*. Con ese fin, se desprendieron tres objetivos específicos:

- reconstruir un esquema general de las acciones (con sus determinadas demandas y formas, sujetos protagonistas) llevadas a cabo por la organización
- analizar las relaciones de la organización con los estamentos estatales
- relacionar estos elementos con el contexto en el que sitúa la organización.

A partir de la intención de abordar estos objetivos con las fuentes de información que mayor precisión y datos brinden, el trabajo de investigación se abordó desde determinados aspectos metodológicos. En ese sentido, la estrategia de recolección de la información combinó la entrevista en profundidad y el análisis documental. Además, se revisaron:

.fuentes primarias de información: comunicados de prensa del M-26, noticias periodísticas de diarios locales y entrevista.

.y fuentes secundarias de información: análisis del contexto socio-económico de Rosario y de los debates de las organizaciones populares, de la protesta social en la ciudad de Rosario.

Así se eligieron 168 noticias de diarios locales que permiten construir una estructura general de las temáticas en que la organización se referencia, establecer cómo caracterizan al M-26 los medios de comunicación de la ciudad y recuperar un relato externo, que sirve como contrapunto, sobre los procesos de desarrollo de la organización.

Con la finalidad de darle valor al relato del actor de la investigación se eligieron 66 comunicados de prensa de la organización y entrevistas en profundidad a referentes de la organización. Los comunicados se constituyen como una herramienta para reconstruir los ejes de intervención privilegiados por el M-26, los posicionamientos frente al Estado y su delimitación identitaria. Por su parte, la entrevista, se ha realizado una entrevista grupal con militantes de la organización: Florencia Maggi y Pedro "Pitu" Salinas, brinda elementos para enlazar las diferentes variables en un relato común del desarrollo de la organización.

Este material fue complementado con un análisis del contexto sociopolítico y económico de la ciudad de Rosario y un estado de situación de los debates que atraviesan a las organizaciones populares, como elementos claves para entender en el lugar donde se ubica el M-26.

En una búsqueda e identificación de noticias periodísticas, en cuatro diarios locales (La Capital, El Ciudadano, Rosario 12 y Rosario 3), que hicieran referencia al Movimiento 26 de Junio- Frente Popular Darío Santillán se relevaron un total de 168 noticias. Se han elegido dos estrategias de trabajo con este acumulado. Por un lado, con la totalidad de noticias se buscó elaborar un paneo general de las temáticas en la que la se referencia a la organización. Y por otro lado, se eligieron 45 para su análisis en profundidad y para la búsqueda y análisis de las variables establecidas, ya que se encuentra en ellas una caracterización del M-26, de su identidad y/o de sus posicionamientos.

La misma modalidad de trabajo se utilizó para los comunicados de prensa o declaraciones públicas del M-26 en los que se reconocen 66 pronunciamientos públicos que permitieron armar un esquema general de las acciones y posicionamientos llevados a cabo por la organización, pero de los cuales se seleccionaron 37 por considerar que resultan representativos del conjunto y son aquellos que brindan mayor elementos de análisis.

El trabajo se estructura de la siguiente manera:

Un primer capítulo donde se ofrece la construcción del marco teórico a partir del cual se establece un acercamiento a las teorías que se consolidaron en los años 70 acerca de la acción colectiva y seleccionando de ellas las categorías más útiles para este trabajo.

El segundo capítulo desarrolla un análisis de contexto que sienta las bases para el posterior estudio de caso. En este se presenta un primer apartado donde se especifica en el caso de Argentina y del movimiento piquetero. Esta caracterización esta complementada con un segundo apartado que refiere al contexto de la Ciudad de Rosario en el que se inscribe el desarrollo del Movimiento 26 de Junio.

Finalmente, el último capítulo se centrara en el análisis del caso elegido en el que se presentan los orígenes y características del Frente Popular Darío Santillán y del Movimiento 26 de Junio y se analizan las configuraciones identitarias de esta organización en el período 2010-2014.

I. Perspectiva teórica.

En una primera etapa de la investigación, fue necesario establecer parámetros teóricos que sirvan como herramientas pertinentes para el análisis del caso elegido. Este trabajo focaliza, específicamente, en el estudio del Movimiento 26 de Junio (dentro del Frente Popular Darío Santillán) y en sus particulares formas de acción, vinculación con el Estado y construcción identitaria en el recorte temporal de 2010-2014

Para comenzar a construir el marco teórico, resultó ineludible especificar la definición de movimiento social sobre la cual se decide trabajar. Con este fin, el estudio se orientó, en primer lugar, a la identificación y desarrollo de las líneas teóricas europeas que caracterizan al análisis de la acción colectiva. Desde esta base, se complejizó el concepto de movimiento social a partir de autores latinoamericanos que agregan a este campo disciplinar las variables de contexto y especificidad de Latinoamérica.

Los esfuerzos por encontrar una nueva categoría que permita explicar las formas de acción colectiva se remontan a los años 70 en un contexto marcado por protestas que alzaban nuevas banderas que referían a otras dimensiones de la vida social, trascendiendo los reclamos económicos y desplazándolos al ámbito de lo cultural y simbólico. En este contexto, la perspectiva marxista limitada al análisis del conflicto de clases determinada por aspectos económicos y otras referencias teóricas, que partían de pensar las acciones colectivas como desviaciones sociales y como consecuencias de una inacabada integración, resultaban insuficientes para entender las acciones colectivas que se extendían en esos años en los diferentes países.

Esta dificultad conceptual es abordada en un gran grupo de producciones que se convierten en una referencia inevitable para el análisis de los movimientos sociales. Entre ellas, encontramos distintos intentos de explicaciones teóricas y análisis del impulso, motivación y origen de la acción colectiva. En relación con este cúmulo de producciones teóricas se han desarrollado diversas líneas de investigación orientadas a explicar el cambio de las formas de acción colectiva. Dos de las corrientes más destacadas son la Teoría de Movilización de recursos y a la Teoría de los movimientos sociales.

Esta primera línea interpretativa ha buscado pensar la acción colectiva reforzando su dimensión política. Los autores que pueden ser enmarcados en esta tradición analizan la acción colectiva como respuesta al sistema político, sus oportunidades y restricciones, y toman como punto de partida el producto concreto de la acción y privilegian la aparición en la escena pública de esta. En esta dirección, encontramos a exponentes como Tarrow (1998) que establece que la acción colectiva surge como respuesta a cambios en las oportunidades y restricciones políticas que se encuentran dentro de dimensiones consistentes del entorno político; es decir en respuesta a factores externos que no les pertenecen a aquellos que conforman la acción. En este escenario, los actores sociales y políticos como poseedores de diferentes cantidades de recursos encuentran momentos propicios para la intervención.

Otro concepto fundamental que retoman los autores de la Teoría de Movilización de recursos, es el de repertorio de acción colectiva, que se define como aquel que enmarca las acciones dentro de ciertos límites establecidos por la sociedad y derivados del momento en la cual se producen. Es decir, que existen ciertas formas de acción colectiva que son parte del repertorio “aceptado”, “común” dentro de un momento histórico determinado. Estas maneras de accionar son tipos de acción cosmopolita que logran trascender los límites de lo local y modular porque la forma de acción puede ser trasladada a otra situación.

En esta línea interpretativa, junto a Tarrow, se encuentra a Tilly que sostiene que la acción colectiva tiene ciertas características distintivas. Este autor señala que la acción colectiva siempre ocurre como parte de la interacción entre personas y grupos, que operan dentro de los límites impuestos por las instituciones y prácticas existentes y los entendimientos compartidos y que los participantes aprenden, innovan y construyen historias en el propio curso de la acción colectiva. Para este autor, también existen ciertas oportunidades políticas que habilitan al accionar colectivo.

Este recorrido teórico nos permite establecer que esta perspectiva de análisis hace énfasis en el carácter instrumental de la acción colectiva. En consecuencia, se estudia la acción colectiva desde el análisis de las luchas políticas y de los condicionamientos de oportunidades y restricciones establecidos por la sociedad.

Por el otro lado, encontramos la Teoría de los Movimientos Sociales que hace énfasis en el aspecto cultural, simbólico e identitario de la acción colectiva y los va a definir

como fenómenos permanentes, estables y perdurables en el tiempo que van a ser explicados por la dimensión estructural. Dentro de este enfoque la construcción de identidad se ubica como un elemento constitutivo de la acción colectiva y no sólo como mero instrumento. Los autores que se enmarcan dentro de esta tradición asumen que existieron transformaciones propias de la sociedad “posindustrial” donde el eje de la identificación y de los conflictos sociales se trasladó del ámbito laboral-económico hacia dimensiones culturales (identidad personal, tiempo y el espacio en la vida cotidiana) y que a su vez, estos procesos se han constituido como múltiples y heterogéneos. Es así que estas transformaciones han dado lugar a nuevas construcciones de identidad y por lo tanto a nuevas formas de acción colectiva. Dos de los grandes referentes de esta perspectiva teórica son Touraine (1995) y Melucci (1999).

Para avanzar en el estudio de cómo se construye la idea de movimiento social, es importante señalar que ambos autores la consideran como una forma particular de acción colectiva con determinadas características. Así, Touraine sostiene que existen tres características fundamentales para poder delimitar al movimiento social. El primero de los principios es el de identidad que es definición del actor por sí mismo, que se asume conscientemente, reconociéndose y siendo reconocido como parte de la misma unidad social –solidaridad-. Una identidad que se constituye y organiza a partir del conflicto, el reconocimiento del adversario y del objeto de lucha.

A partir de esta distinción, se deriva el principio de oposición determinado por esa identificación del adversario que surge del conflicto y se entiende que esa oposición parte de poner en entredicho los lineamientos generales de la vida social y de disputar el sentido y la dominación de un campo común- el del sistema de acción histórica-. De esta manera, solo existe movimiento social cuando la disputa, cuestionamiento se ubica al nivel del modelo cultural. Esto significa que todo movimiento social debe regirse, también, por un principio de totalidad que determina que lo que se pone en cuestión es la orientación general del sistema de acción histórica (toda la acción de su adversario). Así, los movimientos sociales luchan por la dominación de la historicidad y del modelo cultural (forma de movilización, jerarquización, de necesidades). Una de las formas en que se materializa esta disputa es la conducta de innovación social y cultural que los caracteriza, que cumplen una función polémica al oponerse a la reproducción

de la cultura dominante. Son estas conductas que escandalizan y cuestionan todas las formas de control social.

Desde este enfoque que resalta el elemento identitario, los movimientos sociales son definidos como “la acción conflictiva de agentes de las clases sociales que luchan por el control del sistema de acción histórica” (Touraine: 1995: 239). Los movimientos sociales y su constitución no dependen de las situaciones de crisis directamente; las crisis traen consigo el esfuerzo de reconstrucción de la sociedad y su funcionamiento. Los movimientos sociales necesariamente ponen al poder en entredicho. En ese sentido, solo el movimiento social tiene capacidad para movilizar a una comunidad contra un adversario (mientras que la reacción solo se dirige al interior de una colectividad).

Otro elemento significativo para estos autores es la definición de los movimientos sociales por el “enfrentamiento de interés opuestos, por el control de las fuerzas de desarrollo y del campo de experiencia historia de una sociedad” (Touraine: 1995: 250). Es decir, que se definen alrededor de un conflicto social general, poniendo en entredicho el sistema de organización y desarrollo social, cultural, político y económico.

Para Touraine, como representante de la línea teórica de los movimientos sociales, “el movimiento social solo es identificable como elemento de un campo de acción histórica, es decir, de las interacciones entre el actor colectivo del que se trate, su adversario y las expresiones relativamente autónomas del sistema de acción histórica, en particular del modelo cultural” (1995:257)

Por su parte, Melucci (1999) considera que el análisis de los movimientos sociales como forma específica de acción colectiva es indispensable frente a una realidad que se torna estable y permanente dentro de las sociedades complejas, es así que no se presentan como elementos residuales, esporádicos o transitorios. Tener en cuenta los aportes de Melucci resulta relevante en esta investigación, en tanto permite complejizar la mirada sobre los movimientos sociales; este autor parte de la idea de que los movimientos sociales no son una unidad o un dato, sino que son un sistema integrado de acción caracterizado por una heterogeneidad de orientaciones, propósitos, fines, formas de solidaridad y organizaciones.

A su vez, su pensamiento logra una mixtura entre el enfoque de la movilización de recursos y el de los movimientos sociales. Se considera que los movimientos sociales están signados por redes de interacciones y significaciones pero que actúan necesariamente en un contexto de oportunidades y restricciones propias de la sociedad en la que se encuentran. Sin embargo, el énfasis está puesto en las construcciones identitarias que se dan en estas formas de acción colectiva. Es decir, no podría existir una lectura del sistema de oportunidades sino existe un entramado de relaciones y significaciones que permitan definirse a sí mismo y desde ahí definir al entorno, medios y recursos. (Melucci: 1999). De esta manera bajo la idea de una identidad colectiva se elabora un sistema de acción con una particular definición de las expectativas y cálculos de los costos de la acción. Para entender más claramente el énfasis de estos autores, “la acción colectiva nunca se basa exclusivamente en el cálculo de costos y beneficio, y una identidad colectiva nunca es enteramente negociable” (Melucci: 1999: 173)

Los movimientos sociales se conforman en este contexto como una alternativa frente a los patrones dominantes de significación y se constituyen como formas alternativas de relaciones entre las personas y de nombrar el mundo. Entender que uno de los ejes explicativos se ancla en las implicancias y modificaciones sobre los patrones culturales y la construcción de identidades y subjetividades permite ampliar la mirada e ir más allá de la acción colectiva concreta y reconocerla como un proceso estructural.

La recurrencia a una nueva categoría como la de movimientos sociales implica el desafío de no limitarse a la tradicional dicotomía sociedad civil-Estado y de pensar un espacio público que funciona como intermediario entre ciertas demandas propias de la sociedad civil y los procesos de institucionalización. El movimiento social no busca institucionalizarse completamente o transformarse en otra forma organizativa política tradicional, pero sí busca influenciar en la toma de decisiones y en la formulación de políticas públicas.

En el marco de estas consideraciones, se construyen un grupo de preguntas que orientan la profundización del marco conceptual. *¿Qué influye sobre la dimensión política relacionada con estos movimientos? ¿Qué consideraciones resultan indispensables para entender la relación del Estado (y la institucionalidad) y los*

movimientos sociales? ¿Y cómo debemos repensar esas categorías frente a un Estado con orientaciones diferentes?

Como ya establecimos, los movimientos sociales se erigen sobre la construcción de una identidad que pone en cuestión las orientaciones generales del sistema hegemónico de acción. Es decir, que partimos de una primera consideración: entender que toda acción colectiva nace y está condicionada por el sistema social e histórico en el cual surge.

El sistema institucional, para Touraine, es aquel que “produce decisiones que definen el marco de acción de las organizaciones” (1995: 243). Así, los movimientos sociales deben reconocer los límites del campo de decisión, en este cada actor tiene una posición relativa respecto a los demás. El sistema institucional siempre es limitado, no todo se discute, no todos deciden y no todos los intereses son representados. De esta manera, el movimiento social siempre se encuentra en una forma de participación dependiente, ya que donde hay conflicto hay una relación de dominación. Es decir, que está marcado por “la tensión entre la conciencia alienada que reproduce las miras de la clase superior y una voluntad de ruptura” (Touraine: 1995: 261) que rechaza al adversario. Es así, que un movimiento social no solo depende de su nivel de integración sino también de la situación de su adversario y del estado del sistema de acción histórica. En palabras de Melucci, “Los movimientos son sistemas de acción que operan en un campo sistémico de posibilidades y límites. (...)El modo en que los movimientos definen su acción es el nexo concreto entre orientaciones y oportunidades/constricciones sistémicas” (1999:10)

A pesar de esta consideración, Touraine enfatiza en que un análisis del movimiento social no debe considerar particularmente el funcionamiento del Estado, de las crisis políticas e incluso de las luchas por el poder (diferenciándose así de la perspectiva de la “movilización de recursos” que ubica al Estado y el sistema institucional como eje teórico central para sus estudios). Ya que los movimientos sociales no tienen como característica determinante la “lucha por el poder del Estado” sino que ponen en juego otras dimensiones.

Para comprender con mayor claridad por qué estos autores establecen estos supuestos hay que tener en cuenta qué forma tomaba el Estado y lo institucional al momento de su producción. El Enfoque de los Movimientos Sociales se inscribe en

Europa en la década del 60 y 70 y se desarrolla frente al surgimiento de nuevas demandas sociales que no eran contenidas por las instituciones políticas tradicionales y el Estado. Diversos autores analizan las transformaciones que caracterizaban este período. Entre estos cambios, reconocen un desplazamiento del Estado del orden político. Es decir, aquella centralidad que había consolidado años anteriores se pierde y la esfera del mercado asume un nuevo protagonismo. Asimismo, esto se acompañó con transformaciones en el ámbito de la representación política¹. La conjunción de estos procesos dio lugar a un debilitamiento de los partidos políticos como lugares de identificación política estables y de los canales estatales para la resolución de conflictos.

En ese contexto, los movimientos sociales nacen como construcciones identitarias que consolidan nuevos espacios de la política y demuestran la pérdida de confianza en las instituciones políticas y en el Estado. Con estos condicionamientos, una de las maneras en las que ha sido analizada la relación entre ese Estado y los nuevos movimientos sociales es a partir de la idea de institucionalización de los movimientos sociales. Para los autores del Enfoque de los Movimientos Sociales esta institucionalización estaba vinculada a una pérdida de radicalidad y burocratización de los movimientos sociales y/o una cooptación de estos por el Estado.

Sin embargo, si analizamos el contexto en el que se ubica el caso investigado nos encontramos con un escenario y un Estado que va configurando nuevas orientaciones y precisa de algunas otras claves analíticas. En los últimos años Argentina y la región han visto un proceso de consolidación de Estados que se estructura de manera diferente. Con esta afirmación hacemos referencia a que el Estado empieza a ubicarse nuevamente en el centro de la escena con participación activa en la vida económica, social y política de la sociedad. Los intentos de denominar a estos Estado han sido diversos: Estado “compensador”² “posneoliberal”, “populistas”, de una matriz “nacional-popular”, etc. Más allá de las nominaciones estamos frente a un Estado que tiene una presencia activa en la regulación de la economía y de la vida social con políticas sociales que por un lado implican una mejora de la condición de vida de la

¹ Trabajado en profundidad por Manin en “Metamorfosis de la representación” (1992)

² Una definición compartida por Gudynas y Pablo Stefanoni según la cual el Estado fomenta la explotación y exportación de la naturaleza, a la vez que fortalece su faz intervencionista y despliega políticas de carácter redistributivo

población y por el otro contienen a muchas de las demandas de los nuevos movimientos sociales. Esta situación obliga necesariamente a repensar las relaciones Estado-Movimientos Sociales partiendo de que se complejizan las maneras de vincularse y que no siempre significan una pérdida de radicalidad o transformación total de la identidad de los movimientos.

En el caso Argentino, esta forma estatal se consolida bajo los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner (2003-2015). Este gobierno se ancló en un “proyecto político de reconstrucción económica, reparación social y ampliación de derechos” (Crucella;Robin:2014:74) Durante este período este gobierno ha tenido como sostén un crecimiento económico sostenido en un modelo de exportación de los commodities, una ampliación de las ayudas sociales (“Jefes y Jefas del Hogar”, “Manos a la obra” o “Plan Nacer Argentina”) y políticas relacionada a la lucha por los Derechos Humanos asociados a los crímenes cometidos en la última dictadura militar (anulación de las Leyes (de indulto) de Punto Final y Obediencia Debida, lo cual permitió reabrir los procesos por crímenes de lesa humanidad cometidos). A su vez, estos elementos se articularon, a su vez, en un discurso que se contrapone con el modelo neoliberal y a las políticas neoconservadoras. Así, vuelve a existir una centralidad en el Estado y en su rol en lo político-económico.

Frente a este nuevo escenario es necesario reconocer nuevos condicionantes y posibilidades de la relación movimiento social y Estado. En ese sentido, a estas orientaciones estatales una de las variables de relación es la participación de algunas organizaciones sociales en el Estado a través de cargos políticos en la función pública y la participación en la gestión de programas gubernamentales.

También, una de las formas de vinculación es de aquellas organizaciones que no se alinean completamente al gobierno existente. Este tipo de relación se complejiza a partir de dos dimensiones. Por un lado, el aumento de recursos destinados a la ayuda social y su consecuente masificación de los planes sociales por parte del Estado. Aunque muchas veces este factor es analizado como un elemento desmovilizador de las organizaciones, también hay que reconocer que se estructura como una plataforma de recursos que las organizaciones pueden tomar como herramienta para fortalecer sus propias construcciones territoriales y que además, se erige como una de las maneras, transitoria, de contener la demanda de trabajo de algunas organizaciones

sociales. Por el otro, la inclusión de muchas de las demandas de los movimientos sociales en las políticas y el discurso de las nuevas orientaciones estatales habilitan una nueva forma de vinculación con el Estado. Con esto se hace referencia a que se abre una mayor posibilidad para las organizaciones de conquistar algunas políticas concretas. Finalmente, estos elementos constituyen una revalorización del Estado como espacio político, no unitario sino más bien complejo y multidimensional, en el que se puede intervenir y obtener conquistas determinadas. Esta consideración del lugar del Estado en la disputa política repercute en los debates y desarrollos de las distintas organizaciones sociales.

A partir de este recorrido queda evidencia que las vinculaciones movimiento social-Estado toman, necesariamente, otras formas en cuanto cambian las orientaciones de los Estados.

Este proceso de lectura e investigación dan lugar a que se privilegie el enfoque de los movimientos sociales sobre la teoría de la movilización de recursos. Esta posición teórica se justifica en cuanto en este trabajo se considera la identidad como factor fundamental para entender los procesos de surgimiento y permanencia en el tiempo del movimiento social elegido. Asimismo, se reconoce como un elemento estructurante la presencia de un conflicto que trasciende los límites y que llevan a poner en cuestión la totalidad de un sistema. Sin embargo, el estudio del caso elegido requiere involucrar otras dimensiones a las cuales los autores del Enfoque de los movimientos sociales no refieren o sobre los cuales no ponen acento. En ese sentido, pensar la vinculación del Estado y los movimientos sociales resulta pertinente para el trabajo al analizar las orientaciones que el Estado asume en nuestro recorte temporal.

Para finalizar con la construcción de nuestra perspectiva teórica es necesario sumar algunos agregados teóricos. Entender que los fenómenos no responden a una sola dimensión nos lleva a encontrar una clave analítica, que podríamos relacionar con los autores del Enfoque de los Movimientos Sociales (Melucci, Touraine): considerar que estos fenómenos trascienden esos límites y se complejizan implicando múltiples dimensiones (económicas, culturales, identitarias), constituyéndolas a todas como imprescindible para la construcción del movimiento social y su identidad. De esta manera, “los movimientos sociales se ven nutridos por múltiples energías que incluyen

en su constitución desde formas orgánicas de acción social por el control del sistema político y cultural, hasta modos de transformación cotidiana de autoproducción societal (Calderón: 1986). Cabe destacar, que eso se materializa en los cuestionamientos de estos movimientos sociales donde no solo se oponen a las consecuencias de las políticas económicas neoliberales, sino que también rechazan las formas culturales, sociales y políticas que asume el sistema neoliberal.

En ese sentido, más allá de compartir que los nuevos movimientos sociales surgen de un desplazamiento de las demandas a otros ámbitos de la vida social, resulta preciso en nuestro caso complejizar esta transformación porque la conformación de estos movimientos sociales no deja de referirse de algún modo a problemas de índole económico. Por ejemplo, en Argentina es muy difícil intentar explicar el surgimiento del movimiento piquetero evitando las variables económicas que marcaban un gran nivel de desocupación y concentración del capital asociadas a la década del 90 argentina. (Seoane; Taddei y Algranati: 2008)

Por último, resultaba interesante recuperar un aporte que nos permite darle un enfoque más “latinoamericano” al estudio de los movimientos sociales el de Maristella Svampa. Ella esboza cuatro dimensiones características que asumen los movimientos sociales en Latinoamérica: identidad territorial (donde el territorio se ubica con un lugar de resistencia y de nacimiento y resignificación de nuevas relaciones sociales), la utilización de la acción directa disruptiva y no convencional como forma de lucha, “formas de democracia directa a partir de la acción no institucional” y la demanda de autonomía (Svampa: 2012)

Con este marco teórico y sus correspondientes salvedades es necesario adentrarse en la caracterización del contexto en el que se inscribe nuestro caso.

II. Análisis de contexto.

a) Argentina.

Este paso por los diferentes enfoques nos permiten reconocer una preocupación compartida por los distintos autores europeos y latinoamericanos, y por esta investigación es el análisis de contexto en el que surgen y se consolidan los movimientos sociales. Como bien sostiene Touraine “no se puede analizar un movimiento social fuera del campo de la historicidad en el que se forma” (1995: 253). El análisis de los movimientos sociales implica tanto un estudio de las conductas sociales como también del sistema de relaciones sociales y económicas y la naturaleza de la acumulación y de la dominación económica (En nuestro caso, es el análisis de un sistema capitalista neoliberal). Haciendo base en que toda acción colectiva está siempre ubicada en una sociedad concreta, en un tiempo y espacio determinado con un sistema político determinado resulta imprescindible hacer un repaso del contexto en el que surge (o se constituye con mayor fuerza) el movimiento piquetero en Argentina.

Es indudable que el tipo de investigación que nos proponemos resulta insoslayable la consideración de la dimensión histórica, tal como lo analiza Iglesias: “La especificidad de la acción colectiva denominada piquetera, no radica tanto en su forma, ya que el piquete, en tanto medida de lucha fue utilizado con anterioridad por chacareros y sindicalistas, sino, más bien, en el contexto histórico en que se desarrolla” (2010:21)

En ese sentido, no se podría pensar el movimiento piquetero sin tener en cuenta los 90 y las transformaciones que lo caracterizan. En Argentina, bajo el gobierno menemista, durante los 90 se implanta un proyecto económico basado en la desregulación del mercado, la reducción del déficit fiscal, la privatización de empresas e industrias estatales y la devaluación del peso. Con estas políticas existió una redefinición del Estado y sus funciones que desarticuló lo que es conocido como un Estado Social (o de bienestar).

En términos laborales, las consecuencias más notorias fueron un gran aumento del desempleo y del trabajo precario (amparados por la nueva ley Nacional de Empleo). Así, los 90 fueron años caracterizados por una desarticulación de las formas tradicionales de socialización tanto sociales como laborales. Este proceso que tuvo un

carácter abrupto y vertiginoso, pero que condensaba proceso de desindustrialización iniciados en la década del 70, implicó una disolución de las instancias productoras de identidad y solidaridad colectiva. Así, se vuelve un fenómeno masivo el alejamiento al trabajo formal, la organización sindical y la estabilidad y estructuras que de ella derivaban. Esto significó un reacomodamiento de las formas de acción colectiva en el que empezaron a tomar protagonismo algunas formas que no eran hegemónicas hasta ese momento. En ese sentido, “No se trata solamente entonces del inicio de un nuevo ciclo de protestas sociales, sino también de que el mismo aparece encarnado en sujetos colectivos con características particulares y diferentes de aquellos que habían ocupado la escena en el pasado” (Seoane; Taddei y Algranati: 2008: 246).

En Argentina, se refleja en la aparición de nuevas formas de acción colectiva que implicaban rever las categorías de análisis más bien referidas a formas de acción colectiva institucionalizadas. Frente a las tradicionales formas de organización política: centro de estudiantes, partidos políticos y sindicatos, se refuerzan las organizaciones con construcción de base territorial. Entre esas nuevas formas de organización es que se reconoce el movimiento piquetero.

El Movimiento Piquetero.

Es en este contexto de políticas económicas y sociales de tinte neoliberal que tuvieron como consecuencia la exclusión y del desmejoramiento de condición de vida de la población, se produjo la aparición del movimiento piquetero. Este movimiento esta caracterizado, por algunos autores, por el piquete como forma de accionar. Sin embargo, esta acción se convierte en innovadora cuanto no sólo se trata de una forma de acción sino también como un forjador de identidades políticas, es decir como una forma de hacer “aparecer” un nuevo sujeto. (Iglesias: 2010).

Frente a la constitución de este nuevas formas de acción colectiva han existido diversos trabajos y estudios que han buscado interpretarlos³. Svampa y Pereyra (2009), Giarraca y Grass (2001) y Merklen (2005) han hecho hincapié en dimensiones

³ Algunos autores (Schuster: 2005,2004; Pérez: 2008) han elegido como referencia el enfoque de la “movilización de recursos” considerando al piquete como una acción colectiva producto de las situaciones políticas y la distribución de una cantidad de recursos disponibles en la sociedad.

relacionadas con los procesos identitarios y de integración social que se derivaban de estas formas de acción colectiva.

A su vez, Scribano, otro de los autores, ha introducido el concepto de “redes de conflicto” para explicar este fenómeno, haciendo referencia a la trama que se establece de trasfondo de la acción colectiva. Otra de las características que destaca este autor de la acción colectiva es la lucha por la definición del sentido socialmente válido y la construcción de una identidad colectiva, que retoma de Melucci.

Como se estableció, la lectura de los trabajos de Svampa y Pereyra (2003) sirve de guía para pensar la conformación y constitución del movimiento piquetero en Argentina. Estos autores se desatacan por hacer énfasis en los aspectos simbólicos y la construcción de identidades como producto de una mixtura de culturas políticas de lucha pasadas. Además, establecen que esta identidad se forja paralelamente a la acción política. Así refieren a la complejidad de las formas acción colectiva que caracterizaron el fin de los 90 de esta manera: “Esos conflictos representan el punto inicial en el cual una nueva identidad- los piqueteros-, un nuevo formato de protesta – el corte de ruta-, una nueva modalidad organizativa – la asamblea- y un nuevo tipo de demanda –el trabajo- quedan definitivamente asociados, originando una importante transformación en los repertorios de movilización de la sociedad argentina” (Svampa y Pereyra: 2009 :25)

Antes de adentrarnos específicamente en el análisis del caso elegido, es necesario realizar una aclaración: las referencias que haremos –de ahora en más- al movimiento piquetero se hace a sabiendas de que no se trata de un fenómeno único o monolítico, sino que ha contenido dentro de él diversas orientaciones, ideologías y prácticas. Por esta consideración, es que se habla de movimiento piquetero como “movimiento de movimientos” (Svampa y Pereyra: 2009).

En el contexto de esta gran diversidad dentro del movimiento piquetero Svampa y Pereyra logran identificar un elemento común de todas esas experiencias que les permiten ser englobadas bajo la categoría de “movimiento piquetero”. “Ese elemento puede ser definido como una identidad piquetera, cuyo anclaje no es otra cosa que un relato constituido a partir de 1996 en el que se narra la experiencia de los piqueteros. (...) Esa narración vincula tres términos fundamentales: en primer lugar, un nombre – piqueteros- que es agente principal de las acciones que la historia narra; en segundo

lugar, y diremos que como eje central, se encuentran precisamente esas acciones que son los cortes de rutas –los piquetes–y, en tercer lugar la historia se complementa con los motivos y las consecuencias de esas acciones, lo que remite centralmente tanto al vínculo entre modelo económico y crisis, cuanto a la demanda genérica de trabajo digno así como a la recepción y administración de planes asistenciales. Ese relato es el que da sentido a los acontecimientos que recorren toda la historia piquetera y que finalmente explica el surgimiento de las organizaciones de desocupados como una consecuencia de la desestructuración productiva del país” (Svampa y Pereyra: 2009: 168)

Acorde con esta percepción, dentro de la literatura que profundiza el tema se encuentran algunas consideraciones generales comunes de este movimiento. Uno de los primeros acuerdos dentro de los autores es identificar como punto de referencia para entender la historia de este movimiento los cortes de ruta entre 1996 y 1997 en Neuquén, Salta y Jujuy que derivaron en mecanismos de democracia directa y solidaridad colectiva, remarcando de esta manera su carácter comunitario. La demanda principal de estas protestas era el trabajo a partir de la pérdida de empleo de una gran cantidad de personas a causa de las privatizaciones de empresas estatales. Desde esta primera etapa, entendida como la aparición en pública de los piqueteros como actor social, los piquetes como forma de protesta social se hicieron más sistemáticos y más efectivos.

Teniendo en cuenta estas consideraciones generales y de un análisis de las diferentes características del movimiento piquetero, en este trabajo se jerarquizan dos de las dimensiones claves para entender esta forma de acción colectiva.

Como refiere Svampa y Pereyra en su libro “Entre la ruta y el barrio” el movimiento piquetero puede dividirse en dos vertientes: aquella identificada con acciones de ruptura como los piquetes (como respuestas a cierres o privatizaciones de empresa) y la que refiere a la acción territorial y organizativa (específicamente en el conurbano bonaerense) como resultado de un gran aumento de la pobreza y del desempleo.

Retomando las categorías establecidas por el enfoque europeo de los movimientos sociales es significativo remarcar como algo determinante la construcción de una identidad común de aquellas personas que fueron privados de un trabajo formal y se constituían como desocupados.

Así, Svampa remarca que la construcción identitaria se da a partir de la inscripción territorial y la dimensión comunitaria de este movimiento social. Esta construcción identitaria significaba reconocerse como piqueteros, teniendo una “carga estigmatizante mucho menor” que la categoría de desocupado (asociado a un rol individualizado pasivo) y definiéndose por su condición activa (Svampa y Pereyra: 2009)

Ahora bien, una vez establecidas los rasgos fundamentales de la identidad piquetera (la acción directa, el trabajo comunitario, la redefinición del desocupado) es interesante para el objeto de esta investigación preguntarse ¿bajo qué procesos organizativos se consolida esta identidad naciente?

A pesar de la salvedad que hacen los autores del EMS de no interpretar los movimientos sociales a través de las acciones más concretas, de las formas visibles sino a través de análisis más estructurales, “Los movimientos sociales se nos hacen visibles a través de la estela que va dejando su acción. Esa estela son sus formas de lucha; pero como toda estela, es engañosa: su forma, su textura, su trama interna y su visibilidad cambian según pasa el tiempo, el lugar de observación, el tipo de mirada y el tiempo durante el cual la mantengamos” (Zibechi: 2003: 21)

Sin embargo, limitado por los recursos disponibles para esta investigación y herramientas para el análisis, las formas de lucha no dejan de ser un elemento clave.

Para el caso elegido, pensar en las formas de lucha, específicamente en el piquete significa también entender cómo se establece un proceso de reatralimentación con la construcción identitaria como formas de acción autoafirmativas (en términos de Zibechi). Estas acciones nacen de un grupo poblacional que se encontraba “excluido” de ciertos canales institucionales. Así, se establece como un proceso de transformación positiva de las características de exclusión volviéndolas base de su subjetividad e identidad. Es decir, paralelamente se trataba de un proceso de desestigmatización de las características negativas que se le atribuía al desocupado/piquetero y por el otro de un proceso de dignificación, de afirmación de una identidad con nuevos valores. Son estos métodos los que permiten expresar una identidad nueva, expresar nuevos significantes alrededor de las mismas realidades tradicionalmente catalogadas con características negativas.

¿Por qué las formas de lucha expresan identidad? La mayoría de la bibliografía alrededor de los piquetes como formas de acción colectiva establece que en ellos se identifica claramente una identidad común marcada por la dimensión comunitaria, la solidaridad entre los participantes. De esta manera, Svampa y Pereyra ubican a los piquetes como el “espacio físico donde se materializó la identidad piquetera” (2009).

Sobre este punto, resulta útil retomar las palabras de Scribano, “Entre las conclusiones sobre el alcance, causas y potencialidades de los cortes de ruta se pueden destacar: su efecto de visibilización de actores que dadas las condiciones del proceso neoliberal permanecían invisibilizados, el sentido que adquiría la estrategia de cortar las vías de comunicación, la modalidad asamblearia para la toma de decisiones y la creación de la múltiple y compleja identidad piquetera.” (Scribano: 2009: 103)

Otro elemento importante a destacar de esta forma de acción es que dejó de ser esporádica y pasó a constituirse como la manifestación de “la idea de que otra identidad-y otro destino-eran posible para quienes habían perdido su trabajo y habían visto interrumpida su carrera laboral” (Svampa y Pereyra: 2009: 34) Esto cobra significancia en cuanto se entiende que esta movilización es posible por la base de una identidad territorial construida. En ese sentido, Svampa y Pereyra remarcan como los piquetes se conformaron en “un importante mecanismo para reafirmar identidades, para confrontar, para abrir negociaciones, para dirimir espacios o alineamientos políticos o como forma de lograr recursos rápidos para paliar situaciones cada vez más angustiantes de hambre y padecimiento y para reorganizar la política local golpeada también por la crisis económica.” (2003:38)

Acompañado a los piquetes, el otro gran espacio desde donde se cristaliza la identidad de este movimiento es la acción comunitaria y territorial en la que el barrio se constituye como el espacio por defecto de organización. Esta dimensión es sumamente importante si pensamos en términos de Merklen que establece el proceso de “inscripción territorial de las clases populares”. Esta característica queda reflejada en el lugar que ocupa el barrio como un punto de referencia para la acción y organización. Surgían, así, pequeños espacios de construcción y reafirmación de una identidad ofreciendo no solo un espacio de reclamo al Estado por las demandas básicas sino también un espacio de resignificación del acontecer cotidiano y de otra manera de experimentar la vida cotidiana que se contraponían con las hegemónicas

(propias de un sistema neoliberal). En palabras de Zibechi, “Se habrían registrado dos procesos en el seno de estos grupos: la negación del “afuera” y la producción de una forma de hacer” (2003:81). A pesar de que estas experiencias estén constituidas como alternativas con una proyección limitada en términos territoriales o de alcance, no significa que no pongan en cuestión las bases mismas del sistema. Allí, volvemos a repensar esta idea de la disputa por el sentido y por el “sistema de acción histórica” en su totalidad. Es así, que también es característico de la identidad piquetera la redefinición del problema del desempleo, identificando las responsabilidades políticas estatales y las consecuencias del modelo económico (Svampa y Pereyra: 2009).

Estas organizaciones se caracterizaban por usar para auto-definirse términos como autonomía y horizontalidad. Estos principios tienen un carácter negativo al significar el rechazo e independencia de estructuras partidarias y del Estado, aunque también se refieren a procesos de autoafirmación y al reconocimiento de una forma particular del hacer. Sin embargo, el término autonomía y su relación particular con las institucionalidades no eran, de ninguna manera, lineales.

En cuanto a su relación con el Estado, vuelve a observarse la complejidad de cuando nos referimos a esta en términos teóricos. Es decir, se observa que son experiencias que nacen en un cierto contexto y son limitadas por un determinado desarrollo institucional-político pero que a su vez apostaban a la construcción fuera de ellos. Por un lado, la autoproducción de lo público y la construcción comunitaria-barrial por fuera de los límites estatales y por el otro lado la dependencia de recursos.

Frente al primer punto, podemos destacar la construcción de una dinámica territorial que ofrecía alternativas frente a los vacíos que habían dejado las consecuencias neoliberales. De esta manera, se forjaban formas de trabajo, educación y organización paralelas a las ofrecidas por el Estado. Los proyectos productivos, los trabajos comunitarios eran definidos en relación a las necesidades colectivas y de manera horizontal a través de prácticas asamblearias. En términos de Dinerstein, Contartese y Deledicque (2010) se trataba de la elaboración de “una suerte de políticas públicas pensadas, elaboradas e implementadas desde el ámbito no estatal o “desde abajo”. Así justificamos el uso del término “política de bienestar desde abajo”. Eran proyectos que suplían la ineficiencia o falta de políticas públicas estatales.

Esta esfera de relación con el Estado, no está desligada de la segunda que señalamos: la dependencia de recursos. La mayoría de las organizaciones englobables en la idea del movimiento piquetero dependía de los planes sociales para la subsistencia mínima. La relación entre estas dos formas de interacción está en pensar cómo se resignifican esas concesiones económicas a través de nuevos proyectos territoriales sostenido en nuevos valores. Entonces, el reclamo hacia el Estado en los piquetes pasaba por obtener los recursos necesarios para sostener estas prácticas comunitarias pero dejando entrever la falta de confianza en las funciones del Estado de garantizar nuevas fuentes de trabajo.

La creación de institucionalidades paralelas a las tradicionales/estatales (las cooperativas de trabajo, las asambleas, los bachilleratos populares) implicaba un descreimiento de que el espacio estatal era un espacio válido para dar disputas en término de construcción de proyectos alternativos.

Para entender esta tensión, es interesante recuperar el concepto de “institucionalización conflictiva”, propuesto por Dinerstein, Contartese y Deledicque, que “implica que las OPs (organizaciones piqueteras) fueron alojadas en el seno del aparato estatal y dicha integración no puede tener lugar sin el reconocimiento político institucional a sus proyectos políticos alternativos.” (2010:74)

Luego de un repaso por algunos de los intentos en caracterizar al movimiento piquetero, se ponderan algunas variables determinantes para el análisis de este movimiento. En ese sentido, se reconoce que el movimiento piquetero es un movimiento social caracterizado por la acción directa –piquete-, la autonomía del Estado y partidos políticos, la estructura asamblearia de organización y el trabajo territorial. A su vez, este último componente implica una redefinición de la subjetividad del desocupado a través de prácticas autoafirmativas. Todas estas se relacionan con el eje de explicación privilegiado para entender el movimiento piquetero: la construcción de una nueva identidad.

Con este encuadre, es indudable que el Frente Popular Darío Santillán forma parte de este movimiento. Sin embargo, para comprender la singularidad que esta organización posee es indispensable retomar la consideración de la heterogeneidad dentro de este movimiento. Svampa y Pereyra establecieron diversas clasificaciones que ayudan a ordenar esa diversidad y que dejan en claro la existencia de diferentes lógicas y

culturas políticas que se conjugan dentro de la idea del movimiento piquetero. Una de las clasificaciones elige como criterio de diferenciación: la relación con las instituciones tradicionales de organización, es decir que las organizaciones se diferencian por estar vinculadas a sindicatos (FTV), a partidos políticos de izquierda (CCC) o por ser autónomas.

Para este análisis se recupera la clasificación basada en la diferenciación de corrientes ideológicas-políticas propuesta por Svampa: “las que inscriben su accionar en el campo nacional y popular –Federación de Tierra y Vivienda, Barrios de Pie, etc.–; las vinculadas a los partidos de izquierda –Partido Obrero, Corriente Clasista y Combativa, etc.– y las organizaciones que provienen de una tradición de “izquierdas” y que plantean la autonomía respecto de los partidos y del Estado –Movimiento Teresa Rodríguez, Coordinadora Aníbal Verón, Frente Darío Santillán, etc.” (Iglesias: 2012: 3)

b) Rosario

En sintonía con la importancia de establecer el contexto de Argentina en el cual se inserta la consolidación del movimiento piquetero, resultó necesario un análisis del contexto socio-económico de la ciudad de Rosario, en el recorte temporal 2010-2014, como el escenario donde se ubica el caso elegido. Con este fin, se priorizaron el análisis de dos dimensiones de la situación rosarina: la dimensión económica asociada a los niveles de empleo, pobreza y salarios; y aquella relacionada con el desarrollo del narcotráfico y sus consecuencias sociales.

En primer lugar, fue necesario reconstruir las condiciones económicas y sociales que estaban dadas en el contexto en el que se inscribe su nacimiento y desarrollo del Movimiento 26 de Junio. Se jerarquizó información que se consideró necesaria para la investigación los índices en torno al empleo (desempleo, sub empleo, salarios) y pobreza que se entienden como determinantes en la condición de vida de los habitantes de la ciudad y que resulta un eje explicativo importante para comprender el surgimiento de los movimientos de desocupados.

En función de este objetivo, se tomó como referencia el trabajo de investigación de Chiroleu, Voras, Delfino y Nogueira (2014) que aborda— las transformaciones productivas y sociales ocurridas en el período de posconvertibilidad en la Provincia de Santa Fe. A partir de un análisis de los cambios en el desarrollo de la industria, agricultura y los niveles de actividad estos autores presentan algunos datos que ayudan a visualizar la gran transformación de la situación económica y social de la Provincia entre el 2001 y el 2013. Transformaciones que sirven para plantear esta hipótesis son aquellos relacionados a la disminución de los índices de pobreza y de personas con necesidades básicas insatisfechas. En ese sentido, en el 2001 17,6% de los habitantes de la provincia vivían con Necesidades Básicas Insatisfechas, mientras que en 2010 disminuye considerablemente a un 9,5%. Al enmarcar estos cambios en la ciudad de Rosario, otro indicador válido es la Tasa de Desocupación Abierta en el Gran Rosario que registra una cifra del 18% en el año 2003 y un significativo 3% en 2013.

Para profundizar la caracterización del Gran Rosario y relacionar las transformaciones de la economía con los índices de empleo, el trabajo de Robin y Crucella (2012) nos resulta de gran utilidad. En términos generales, detectan una mejoría de los indicadores económicos y sociales en el período de posconvertibilidad. Este cambio es

relacionado con las nuevas políticas económicas nacionales que se sostenían con una mayor participación del Estado y un “proceso económico de inédita duración e intensidad, que impactó de forma particularmente positiva en el nivel de actividad y, consecuentemente, en la situación la laboral de la región (...)” (Crucella; Robin: 2014:82). Estos autores asumen que el proyecto político iniciado en el país a partir de 2003 vincula, desde sus políticas, el ámbito de la actividad económica con las condiciones de vida de las personas y por lo tanto generando un lazo entre esfera económica y social. A este elemento, los autores le agregan otro factor explicativo: las características propias de desarrollo de la región. Algunos datos que completan esta idea es el aumento de la Tasa de Empleo de un 35,7% en 2003 a un 43,3% en 2011 y la disminución, lógicamente, de la Tasa de Desocupación de un 19% en 2003 a un 8,1% en 2011.

Una variable que es interesante repasar para comprender la mejoría de las condiciones sociales de vida de los y las rosarinas, es el aumento del salario real promedio. Así, el salario promedio en el 2011 permitía acceder a un 70% más de bienes y servicios que en el 2003. Es decir, que mientras en 2003 el salario promedio de la ocupación principal no cubría las tres cuartas partes de las necesidades básicas de una familia, en 2007 ese ingreso promedio superaba un 25% la satisfacción de la totalidad de ellas. Otro aspecto a observar en el ámbito laboral es un aumento del trabajo registrado lo que evidencia no solo un crecimiento en el número de puestos de trabajo (de un 29%) sino la calidad de los mismos. En ese sentido, otro indicador es la disminución de ocupados con Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados que va de 27.050 personas en 2003 y 2.829 en 2007. Estos indicadores permiten comprender la disminución en los niveles de indigencia (un 82% menos) y de pobreza (un 87% menos) en comparación con los niveles registrados en 2003. Para Crucella y Robin (2014), estos números están parcialmente explicados por la ampliación del sistema provisional, mientras en 2003 un 69,5% de personas mayores de 65 años tenían beneficios previsionales en 2011 aumento a un 94,9%.

Una salvedad necesaria es establecer que el crecimiento y mejoría de los indicadores en la Provincia de Santa Fe y en el Gran Rosario no tuvieron un desarrollo constante y parejo. Por el contrario, las transformaciones tuvieron un gran impulso hasta el 2007-2009 y luego han encontrado procesos de estancamiento o incluso de retroceso.

Una dimensión que resulta útil para complementar la reflexión sobre las relaciones de las organizaciones sociales con el Estado, es el análisis de las políticas sociales. En esta dimensión, según Rocchi y Ferri (2013), existieron dos procesos determinantes a partir del año 2008 que demostraban un cambio en la concepción y elaboración de políticas sociales. Por un lado, en términos nacionales la implementación de la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social en 2009 (AUH), migrando a esta todas personas que contaban con planes sociales o programas nacionales de transferencia de ingresos. Y por el otro, un cambio de perspectiva, del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, en la adquisición de ayuda económica para acceder al consumo de mercadería que se materializó en la implementación de la Tarjeta Única de Ciudadanía.

Por otro lado, la segunda dimensión que se identifica como vital para entender el caso elegido es el desarrollo del narcotráfico en la ciudad de Rosario. Desde hace algunos años Rosario es escenario de un gran avance de una economía delictiva cada vez más arraigada en los territorios de la ciudad y generadora de nuevas identidades, el narcotráfico. Existe un acuerdo general entre aquellos que analizaron esta situación de que existió un crecimiento exponencial del narcotráfico en el País y específicamente la ciudad en los últimos años. Sin embargo, los análisis difieren en las causas explicativas de este proceso. En ese sentido, “La bibliografía actual describe cuatro categorías generales detrás del reciente crecimiento de la cultura narco dentro de las fronteras de la Argentina: la influencia externa de otros países con altos niveles de narcotráfico, la corrupción presente en un nivel gubernamental, la criminalización de la pobreza, y el auge económico desequilibrado en Rosario.” (Yates: 2014: 8)

En esta investigación se parte de que cada una de estas dimensiones no es exhaustiva para entender el desarrollo del narcotráfico en Rosario, pero que son indispensables para un análisis integral de este fenómeno. Retomando la investigación de Yates (2014), la primera de las variables explicativas a la que generalmente se recurre es la influencia externa de otros países, como México y Colombia, que demandan producción y distribución de drogas. Frente a esta “demanda”, Rosario se constituye como un territorio “ideal” por su ubicación (cercanía con Paraguay y Bolivia) y por ser una ciudad portuaria.

Otra de las dimensiones sobre las que se ha enfatizado es la complicidad policial como eje explicativo de la consolidación de redes delictivas ligadas al narcotráfico. El rol de la policía como aliado, impulsor y beneficiario de las redes del narcotráfico configuró una complicidad y corrupción a nivel institucional. Esta hipótesis toma consistencia con las denuncias al ex-jefe de la policía Tognoli y al ex- sargento Almirón por vinculación con los negociados del narcotráfico.

Una de las líneas interpretativas que no se ha profundizado demasiado es la que pone como eje la criminalización de la protesta. Yates (2014) explica que frente a una presencia represiva e intimidatoria del Estado, a través de la policía y gendarmería, las instituciones de autoridad tradicionales se deslegitiman y pierden confianza. Así, las estructuras de identidad, organización y jerarquización ligadas al narcotráfico se ubican como una opción en la búsqueda de una “autoridad positiva” (Yates: 2014).

Por otro lado, se ha relacionado el desarrollo del narcotráfico con el crecimiento económico de la Ciudad. Desde el 2003, Rosario inició un proceso de consolidación del mercado de commodities (soja y manufacturas derivadas de esta) y una expansión inmobiliaria que se expresó en un boom de la construcción a través de convenios públicos-privados (Club de Investigaciones Urbanas: 2013). Una de las hipótesis que vincula estos dos fenómenos es que las ganancias obtenidas a través de las economías ilegales -narcotráfico- son invertidas en edificios (los cuales luego no están habitados) y en tierras para la producción de soja.

El análisis de estas variables contribuye con este trabajo en cuanto permite evidenciar complejidad que asume el desarrollo del narcotráfico y sus consecuencias sociales y económicas.

Por último, resulta indispensable para el estudio de nuestro caso mencionar la repercusión que tiene el fortalecimiento de este fenómeno en la escalada de violencia y de muertes jóvenes en la Ciudad. Con el fin de presentar un estado de situación, Documedia (s/f) confeccionó algunos datos bastante representativos. En ese sentido, en el departamento de Rosario se registró un significativo aumento de los homicidios. En 2005 hubo 108 asesinatos, aumentando a 163 en 2011. Otro momento de gran ruptura es la diferencia entre el año 2012 y 2013. Mientras que en el primer año se registran 182 homicidios, en 2013 dispara a un total de 264 muertes. Otro de los datos útiles para el análisis es la proporción de jóvenes que fueron asesinados. En 2013, del

total de asesinatos un 40% tenía entre 16 y 25 años, un 22% entre 20-35 y un 19% entre 36-50 años.

III. Estudio de caso: M-26 /Frente Popular Darío

Santillán.

a) Antecedentes y origen.

El Frente Popular Darío Santillán (FPDS), espacio que se inscribe dentro de la tradición del movimiento piquetero, es una organización nacional que se forma en septiembre del 2004 como una articulación de diferentes organizaciones territoriales del conurbano bonaerense, organizaciones estudiantiles y culturales. El FPDS se define desde sus inicios como una organización multisectorial teniendo como objetivo componerse por grupos organizados en distintos sectores sociales –barrial, estudiantil, sindical y rural-.

Los antecedentes más cercanos de esta experiencia son las coordinadoras de MTDs (Movimiento de Trabajadores Desocupados) como la Aníbal Verón (2001), el Encuentro de Organizaciones Sociales, la Coordinación de Organizaciones Populares Autónomas. La mayoría de estas experiencias eran conformadas por los Movimientos de Trabajadores Desocupados. Los MTD eran organizaciones de desocupados que tenían como bandera la lucha por el trabajo. Sin embargo, el objetivo de estas organizaciones que buscaban generar una organización que cristalizaran nuevos criterios y formas organizativos forjados en torno a la acción directa y cotidiana (Frente Popular Darío Santillán: 2013). Los MTD tenían como premisas el trabajo digno y el horizonte de apostar al “cambio social”.

Uno de los acontecimientos que marca la identidad y nacimiento del FPDS es el 26 de Junio de 2002. El asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en una jornada de lucha desarrollada en el Puente Pueyrredón, Buenos Aires. Así, esta organización “intenta recuperar en el nombre de Darío Santillán, los valores de solidaridad, compromiso, creatividad, y alegría como proyección del país que queremos cambiar, el mundo que queremos transformar y la dimensión humana que apostamos a construir” (Frente Popular Darío Santillán: 2013:48)

Los primeros lineamientos ideológicos que nacen de la síntesis política de esta nueva organización es la de declararse antiimperialistas y anticapitalistas, sumándole a esto el carácter anti patriarcal acordado en 2006. Estos elementos se conjugan en la

vocación, en su propia definición, de la construcción de poder popular para el cambio social.

Otro de los pilares sobre los que se sostiene el FPDS es la declaración de autonomía del Estado, los partidos, las Iglesias y las Centrales Sindicales. Así, promueve desde sus inicios una organización donde prevalezca la horizontalidad para la toma de decisiones, priorizando las asambleas de base y la instancia de los plenarios nacionales. A su vez, otro de los elementos que permiten profundizar ese concepto de autonomía es reconocer como pilar la autogestión como “la libre decisión sobre el destino de los recursos generados por nuestro propio trabajo, recibidos solidariamente, expropiados a empresas capitalistas o arrancados al Estado” (Frente Popular Darío Santillán: 2013:70)

El FPDS se constituye como una organización con una “impronta muy fuerte de los posicionamientos de los MTD, con un fuerte rechazo a lo institucional y lo electoral.”(Cieza: 2011: 35) A pesar de esto, se ha abierto a cada vez mayor debate en torno a ocupar ciertos ámbitos institucionales. Así, en el 2007 sostenían “quienes integramos los distintos movimientos y agrupaciones del FPDS estamos convencidos de que nada favorable para el pueblo se puede esperar de estas elecciones” (Frente Popular Darío Santillán: 2013:75)

De igual manera, esta organización se considera como un movimiento no solo social, sino también político. Como sustento de esta definición ellos sostienen que “las luchas sociales y políticas no son compartimientos estancos. Pensamos que toda lucha social es política y que no hay lucha política sin carnadura social” (Frente Popular Darío Santillán: 2013:68)

En Rosario, el FPDS está representado por la organización territorial: Movimiento 26 de Junio (M-26). Esta organización nace en el año 2010 después de diferentes experiencias organizativas. El antecedente inmediato del M-26 es Surastilla una organización conformada por la confluencia de estudiantes que ya militaban en el FPDS y de personas que venían de diferentes experiencias de trabajo territorial. El objetivo principal de esa organización era, en palabras de Florencia Maggi –militante del M-26-, “laburar en el marco de la CTD, que era una organización territorial del barrio Molino Blanco que ya existía en Rosario y que ya era parte del Frente Popular Darío Santillán. Con el objetivo de, en principio, trabajar un poco la formación y

algunas cuestiones con la CTD y también formarnos nosotros con perspectiva de armar un sector territorial del Frente Darío Santillán en Rosario con las características similares a los que fueron el modelo (...) que había dentro del frente que eran los MTD en Buenos Aires.” (Entrevista 21/09/2015).

El primer barrio donde comienza a desarrollarse el trabajo barrial es Alvear, Francia al 3500. Desde allí mismo se desprendieron diferentes contactos, “puntas”, que le permitieron a la organización extender el trabajo hacia Tablada, Vía Honda y Villa Moreno, tres barrios de zona Sur de la ciudad de Rosario. Unos años después, el desarrollo de la organización dio la posibilidad de anclarse en un barrio de zona Norte, Cristalería.

b) Consideraciones para el estudio de caso. 2010-2014: las transformaciones identitarias del Movimiento 26 de Junio.

Como se anticipaba, para el estudio de caso se seleccionaron diversas fuentes de información. Entre ellas se destacan: Comunicados de Prensa del Movimiento 26 de Junio, noticias periodísticas en las que se hace referencia a esta organización y entrevistas en profundidad. Una primera lectura de esta información dio la posibilidad de hacer un recorte metodológico en tres momentos para el análisis en detalle y para la identificación de las variables derivadas de los objetivos específicos de la investigación (relación de la organización con el Estado, acciones y ejes trabajados por el M-26).

Es así, que para el análisis de las variables, se toma como referencia la existencia de tres momentos de acción y visibilidad del M-26. Esta periodización indica un primer momento desde el nacimiento de la organización (2010) al 2011, un segundo momento en el año 2012 y un tercer momento del 2013 al 2014. En ese sentido, se caracteriza a estos períodos con diferentes particularidades:

- El primer recorte temporal se ubica en el año 2010 y 2011 y establece que las temáticas que movilizaban la acción de la organización estaban más bien relacionadas a movilizaciones caracterizadas por reivindicaciones de índole económica y reflejaban una estructura organizativa e identitaria ligada a los Movimiento de Trabajadores Desocupados. En este recorte temporal, se encuentra este tópico en 22 noticias periodísticas sobre un total de 25 y las tres restantes refieren a otros temas.

- Esta delimitación permite establecer el 2012 como un año de inflexión. El asesinato de tres jóvenes militantes de la organización deriva en la constitución de un solo eje central de intervención del M-26 en ese año. Es así que todos los registros periodísticos (69) están vinculadas al Triple Crimen, el asesinato de tres miembros de la organización: Patom, Jere y Mono.

- El tercer período se delimita en los años 2013-2014 donde se puede observar una diversificación de las temáticas y dimensiones de la intervención política del M-26. Este elemento queda en evidencia en el análisis del corpus: de 68 noticias, 55 desarrollan asuntos relacionados al triple crimen, 8 a Ciudad Futura (experiencia

electoral iniciada en 2013 por el M-26 junto con el Movimiento Giros) y 5 referidas a otros asuntos.

Desde un análisis general, esta clasificación nos permite identificar dos determinantes en el desarrollo de la organización:

. el condicionamiento en el comienzo de esta organización por los orígenes propios del Frente Popular Darío Santillán y el peso de la tradición organizativa del movimiento piquetero

.y la influencia de los cambios en las coyunturas políticas y en los debates de las organizaciones populares que se reflejan en el proceso de transformación de la estrategia política.

Primer momento. 2010/2011

A fines de avanzar con la caracterización de la primera etapa identificada, fue necesario partir de la caracterización del contexto socio-económico de Rosario establecido en el segundo apartado del trabajo. Este fue, posteriormente, puesto en relación con la información jerarquizada en noticias de diarios y en los comunicados de prensa. A su vez, la entrevista colectiva realizada sirvió como articuladora de los datos en el proceso de análisis.

Como se estableció es pertinente recuperar la caracterización de Rosario establecida en el apartado anterior. Ese análisis permitió reconocer el crecimiento económico de la región y la mejora de condiciones de vida de la población rosarina. En ese sentido, se destaca, en comparación con el período 2001-2003, la disminución de los índices de personas con Necesidades Básicas Insatisfechas, una disminución considerable de la tasa de desocupación (y el consecuente aumento del empleo), una disminución en los niveles de pobreza y un aumento en el salario real de los trabajadores. Estos datos e informaciones permiten reconocer que la situación de los habitantes de la Ciudad de Rosario en términos económicos no era tan crítica como en los años 2001 y 2002, momento histórico en el que surgen las organizaciones piqueteras. Sin embargo, cuando pone en relación el análisis de contexto con las fuentes primarias de información se identifica que: a pesar de que Rosario en el 2010-2011 se presentaba como un escenario más favorable para la mayoría de su población, el Movimiento 26 de Junio en su nacimiento replica las formas organizativas y demandas propias de las organizaciones sociales surgidas en 2001. De esta manera, la triangulación nos permite poner el acento en la importancia de la influencia de los orígenes y antecedentes del M-26: el Frente Popular Darío Santillán, que como ya se estableció nace de la confluencia de organizaciones piqueteras barriales.

El análisis de los datos relevados en torno a las acciones y forma de organización del Movimiento 26 de Junio en el año 2010-2011 evidencia que se replica el modelo de organización territorial proveniente de Buenos Aires, los Movimiento de Trabajadores Desocupados.

Como primer paso para el análisis se identificó en el corpus las acciones llevadas a cabo por la organización y sus reivindicaciones. En este primer período de la organización se reconoce, desde una lectura general de las noticias de diarios locales y

comunicados de prensa del M-26, que ha realizado 13 acciones (movilizaciones y cortes) en diferentes lugares de la Ciudad, dirigidos principalmente a entidades estatales (Promoción social, Gobernación, Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, GECAL), accesos (a la autopista Buenos Aires- Rosario, acceso norte-sur) y a espacios públicos abiertos (Monumento, Plaza Sarmiento, Plaza 25 de mayo). La lectura de los comunicados de prensa de esos años facilitó la reconstrucción de las demandas fundamentales de estas acciones.

Como establecíamos, estas movilizaciones tienen como reivindicaciones prioritarias demandas “económicas” (asistencia alimentaria, eliminación de la incompatibilidad de la Asignación Universal por Hijo con otros planes sociales, aumento de montos de los planes sociales, la extensión en la provincia de Santa Fe del Plan Argentina Trabaja, materiales, herramientas e insumos para los emprendimientos productivos, Tarjetas Únicas de Ciudadanía).

A su vez, el análisis de contexto nos permitió reconocer que estas características que se presentan específicamente en el M-26 están enmarcadas en un contexto general de la protesta en Rosario. En el período 2008-2011, la ciudad fue escenario de una multiplicidad de acciones en las que predominaba las organizaciones piqueteras como actor protagonista y las demandas de índole económica (Rochi, Ferri: 2013)

Más allá de los datos concretos de acciones, es pertinente para la investigación reconocer cuales son las tradiciones organizativas que influyen en esta determinada forma de organización colectiva y de identidad. Así, en este primer período es observable en el corpus como se replican, en la constitución de la identidad del M-26, las características asociadas al movimiento piquetero (piquetes/corte de ruta/acción directa, organización asamblearia y trabajo territorial-comunitario).

Para entender como determina la identidad propia del FPDS y de las organizaciones piqueteras en el nacimiento del M-26 se toma como referencia uno de sus primeros comunicados, específicamente referido al reclamo de Tarjetas Únicas de Ciudadanía al Municipio (Comunicado de Prensa M-26: 25/08/2010). En este pronunciamiento se establecía “nuestro reciente movimiento decidió que el bautismo sea la lucha misma”. En este sentido, la entrevista realizada aportó claridad en cuál era el modelo que se replicaba. Así, una militante del M-26, al referirse a los inicios de la organización, sostenía: “La identidad del frente tenía una fuerte impronta piquetera que creo que de

hecho sintetiza lo más organizado del movimiento piquetero, el Frente Popular Darío Santillán. Y ahí es que nosotros teníamos esa impronta.” (Entrevista 21/09/2015)

Así se reconoce que uno de los pilares era la “lucha”, la acción directa, pero ¿movilizar para qué? ¿Cuál era el reclamo específico? Una recurrencia en las fuentes de información es la presencia del trabajo como demanda fundamental de la organización en sus primeras movilizaciones. Este supuesto se expresa en diferentes formulaciones:

- “trabajo, por fortalecimiento a los emprendimientos productivos y de cooperativas de vivienda” (Comunicado de Prensa M-26: 15/09/2010)

- “es decir por “trabajo digno”” (Comunicado de Prensa M-26: 10/05/2011)

-“Los barrios rosarinos se sumaron a una jornada nacional de lucha por reclamar trabajo” (Rosario 3 14/6/11)

Otra constante que se revela en los Comunicados de Prensa y noticias es la forma en la que se hacían los reclamos. Estas acciones tomaban la forma de cortes –de ruta, calles-. Los diferentes cortes responden a una forma de accionar colectivo asociado a los piquetes, así dos noticias, que referían a una acción del M-26, se titulaban “Un día de piquetes el centro y en los barrios más alejados” y “Piquetes contra la provincia” (La capital 11/5/11-12/6/11).

En estos mismos comunicados, la organización se reconoce como movimiento de desocupados, con cooperativas de trabajos y “asambleas barriales”. De esta manera, los diarios locales en consonancia definen a esta organización como “organización territorial”-“organización social” (Rosario 3 15/09/2010) y como “organización barrial” (El ciudadano 17/09/2010) o “entidad barrial” (La capital 09/05/2011). Esta forma de definirse y de ser definidos van esbozando uno de los elementos identitarios fuertes de la organización: el trabajo barrial.

Los ejes que hemos resaltado hasta aquí se pueden ligar a aquella noción, que retomábamos de Svampa y Pereyra (2009): el movimiento piquetero estaba signado por una identidad reflejada en una nueva demanda –trabajo-, con una nueva forma de lucha –piquete- y una nueva forma organizativa- la asamblea-. De alguna manera estos elementos estaban integrados en la estructura organizativa del M-26, esto se logra corroborar en la entrevista obtenida. En esta entrevista, Florencia contaba “La perspectiva, nuestra idea era hacer pie en los barrios con las propuestas de las

cooperativas. Veníamos trabajando eso fuertemente, el eje del trabajo era un eje muy fuerte. Entonces era una perspectiva muy fuerte de generar una asamblea donde salgan compañeros con intenciones de formar parte de ese emprendimiento productivo que pueda ser en un futuro una cooperativa y trabajar fuertemente la formación... y la lucha que formaba un poco parte de todo” (Entrevista 21/09/2015). En este relato, también queda evidenciada otro de los pilares de la construcción identitaria: la “lucha”.

Esta idea de la “lucha” toma materialidad en la movilización y el corte que se presentan así desde la organización como la opción “al ver agotados los cauces institucionales” (Comunicado de Prensa M-26: 17/02/2015); estas formas de acción colectiva reaparecen a partir de la falta de otras instancias para satisfacer las demandas que exigía la organización.

Estos reclamos se ubican, para esta organización, dentro del objetivo más amplio de crear “espacios donde se apuesta a regenerar lazos de solidaridad y crear formas autogestivas de trabajo” (Comunicado de Prensa M-26: 11/11/2010)

A medida que se avanzó en la reconstrucción identitaria de esta etapa, fue posible caracterizar, también, la relación del M26 con estamentos estatales. A partir del análisis de la información disponible, esta vinculación no dista de ser, en principio, muy distinta a aquella que tenían las organizaciones piqueteras en su origen. En ese sentido el análisis de comunicados y noticias permiten ver que existe una doble relación, por un lado de rechazo a las instituciones estatales, de reafirmación de la autonomía y de la diferenciación de las lógicas de esas instituciones. Y que por el otro, existe una dependencia de ciertos apoyos económicos y planes sociales.

El análisis de las acciones deja ver que la relación con el Estado se estructuraba a partir de la demanda de algunos planes sociales o fortalecimiento a los Emprendimientos productivos. En ese sentido, el M-26 establecía “sin un fortalecimiento estatal a estos Emprendimientos Productivos difícilmente puedan revertir la marginalidad en la que se encuentran” (Comunicado de Prensa M-26: 20/10/2010).

En este primer período, el Movimiento 26 de Junio contaba con diferentes ingresos provenientes del Estado. Por un lado, la primera conquista fue el acceso a la Tarjeta Única de Ciudadanía, que en el análisis de contexto se ubicaba como una de las

políticas sociales más reconocida, de todos los miembros de base de la organización producto de una movilización a Promoción Social de la *Municipalidad*. A su vez, desde el 2010, esta organización contó con un ingreso mensual para sus integrantes provenientes del *Gobierno de la Nación* a través del Programa de Empleo Comunitario. Este ingreso se desplaza en 2011 al Seguro de Capacitación y Empleo (también del Gobierno de la Nación) que aumentó el ingreso mensual de 150 a 250 pesos. Asimismo, estos planes sociales estaban vinculados con programas de capacitación de oficios que elevaban el monto. Estos ingresos de Nación además de garantizar el ingreso mensual permitían una cantidad de dinero destinada a la compra de insumos y materiales necesarios para la constitución de proyectos productivos. Esas dos utilidades de los recursos obtenidos claramente significaron un impulso para el objetivo, que había establecido el M-26 en sus comienzos, de construir cooperativas. La organización, además, contaba con un subsidio único no reintegrable para funcionamiento del Gobierno de la Provincia de Santa Fe en 2011 utilizado para la construcción de locales, fortalecimiento de emprendimientos productivos, entre otras cosas.

Así, el estudio de caso nos permite reafirmar aquello que sosteníamos teóricamente en relación a la vinculación compleja que tienen las organizaciones piqueteras con instancias institucionales. Es decir, la vinculación con el Estado en términos de planes sociales no está desligada de las construcciones territoriales que se detectan en este período (asambleas barriales y cooperativas de trabajo). Sino que más bien generaban un reaseguro de que los miembros de la organización cuenten con un ingreso mínimo que les permita participar en las actividades y en los proyectos comunitarios. En esta manera de relación, se reconoce que no se pierde una de las construcciones identitarias de la organización sino que se utilizan los recursos del Estado para reforzarla.

Por otro lado, en esta reconstrucción también está evidenciada la posición que enfatiza la dimensión represiva del Estado a partir de la criminalización de la protesta. Además, los pronunciamientos públicos permiten identificar esa posición de rechazo frente a las instancias tradicionales de la política. Por ejemplo, en uno de sus comunicados se argumentaba: “La clase política se consume en internas estériles para ver cuál es el candidato a gobernador para el año próximo” (Comunicado de Prensa M-

26: 20/10/2010). Esta posición se refuerza a partir de diferentes posicionamientos de la organización donde se habla del cansancio de la propaganda pre-electoral y las promesas, así sostenían “Basta de Chamuyo electoral” (Comunicado de Prensa M-26: 10/05/2011) En ese sentido, también se ha hecho referencia en sus comunicados a la incapacidad del Gobierno provincial para planificar políticas sociales que fortalezcan el trabajo autogestivo. (Comunicado de Prensa M-26: 10/05/2011)

A manera de síntesis, este primer período, a pesar de inscribirse en un contexto socio-económico más favorable que el del 2001, ubica al M-26 como la organización típica de los movimientos de trabajadores de desocupados. Esto significa la estructuración de una identidad que tenía como pilares: la acción directa, la reivindicación del trabajo y el trabajo territorial. A su vez, resulta característico de este período una relación compleja con el Estado que se expresaba desde la obtención de planes sociales provenientes de los diferentes gobiernos, un rechazo a la forma organizativa tradicionales de la política hasta una denuncia de la dimensión represiva del Estado.

-2012 como punto de inflexión.

“Y hay un primero de enero que funda a sus compañeros”.

Silvio Rodríguez

El 2012 se presenta como un año de rupturas en cuanto a la organización, visibilidad y relación con ámbitos estatales del Movimiento 26 de Junio. Para analizar este segundo período es pertinente describir el acontecimiento que marca esta ruptura y que permite explicar todos los datos obtenidos de las distintas fuentes de información. Este encuadre se pondrá en relación con los datos que se relevan de las noticias periodísticas y comunicados de prensa con el fin de identificar las transformaciones identitarias de este momento.

A principios de este año fueron asesinados tres jóvenes militantes, Jeremías Trasante, Claudio Suarez y Adrián Rodríguez, miembros de la organización. El asesinato de los tres jóvenes fue resultado de una represalia –equivocada- de un hecho previo. Un conflicto entre bandas y la búsqueda de venganza de un ataque que tuvo lugar unas horas antes llevo a miembros de la banda liderada por Sergio “Quemado” Rodríguez a irrumpir en la canchita buscando al “Negro” Ezequiel, preguntando el lugar de su paradero. Sin esperar respuestas, en la oscuridad de la canchita masacraron a Jere, Mono y Patom. Esta masacre tuvo como identificado 5 responsables materiales a su vez ligados al narcotráfico y 3 policías procesados por encubrimiento.

Es importante para comprender los procesos que se desarrollan en el M-26 en este recorte temporal, contrastar este acontecimiento con el contexto general de la ciudad de Rosario en términos del avance del narcotráfico desarrollado en el apartado anterior. Dos de los elementos que dejo ver el análisis de contexto fueron: el desarrollo de la economía del narcotráfico y los grupos delictivos estructurados alrededor de ella y el crecimiento exponencial de la muerte joven relacionado a esto.

Esas características del contexto sin duda permiten una mejor comprensión del cambio de eje de intervención del M-26. En efecto, el aumento del narcotráfico y de la muerte joven se convirtió en un tópico privilegiado por la opinión pública, medios de comunicación y organizaciones sociales.

Así, el caso de Patom, Jere y Mono no se ubica como un caso aislado sino como parte de una situación generalizada en la Ciudad de Rosario. No obstante, las notas periodísticas y los Comunicados de Prensa indican que la forma en la que el M-26 decide abordar esta temática se ancla en el caso concreto de sus compañeros.

Desde el primero de enero, el día del asesinato de los jóvenes, el primer reclamo de la organización fue el esclarecimiento del rótulo que inmediatamente le pusieron los medios de comunicación locales de “ajuste de cuentas”. En esta forma de construir el acontecimiento, se asociaba a que Patom, Jere y Mono tenían antecedentes penales, que eran barrabravas y que habían muerto por un “ajuste de cuenta” entre bandas. Como una manera de desmentir esa versión, la primera lucha del M-26 fue en reivindicar quienes eran estos tres jóvenes como hermanos, hijos y militantes de una organización territorial. “Pedro Salinas del Movimiento 26 de junio explicó que “en este angustiante momento, nos vemos obligados a replicar los chorros de tinta que se han empeñado nuevamente en la cada vez más desvergonzada y mecánica reacción ante este tipo de hechos criminales: no hubo ningún ajustes de cuentas, ninguna venganza por un atentado previo; masacraron a 3 pibes de familia, 3 compañeros de nuestro momento que se empeñaban todos los días en llevar adelante proyectos comunitarios que incluían a la juventud del barrio”.”(Rosario 12 03/01/2012)

El relevamiento de las acciones del M-26 en este período señala que el primero de enero de 2012 abrió una nueva etapa de movilización del M-26. Este cambio implicó que todos los primeros de mes existiera alguna actividad cultural, movilización a tribunales, presentación de revista/libro en forma de exigir justicia por la muerte de Patom, Jere y Mono. En ese sentido, en la lectura de las fuentes de información se refuerza la idea de que “la lucha” es un factor fundamental dentro del pedido de justicia. Sin embargo, aparecen otras formas de manifestación que resignifican la idea de lucha asociada al primer período de la organización. Como explicitaba una militante del M-26 “la línea de continuidad nuestra organización tiene una fuerte impronta de lucha, en el sentido de la construcción colectiva y de saber eso que todas los objetivos de la organización se logran con lucha pensada de distintas maneras. Por eso quizá en algún momento fue el piquete, hoy eso cambia, si el estar en la calle, si de estar acompañando las distintas luchas, si es estar construyendo ese tipo de espacio donde nosotros entendemos que se transforma la realidad” (Entrevista 21/09/2015)

La triangulación entre el análisis de contexto en Rosario y los datos de las fuentes de información en relación a la muerte de sus compañeros demuestra que el 2012 significó dentro del M-26 una reestructuración de las prioridades y ejes de lucha. Así lo corroboraba Pedro Salinas “(...) me parece que esa exposición que tuvimos, en el lugar que quedamos fue llevando a replantear un montón de cosas que de otra manera, muy probablemente, no lo hubiéramos hecho.” (Entrevista 21/09/2015).

En ese sentido, la recopilación de información deja ver que todas las menciones de M-26 en diarios locales durante el 2012 serán en relación a lo que será llamado el “triple crimen de Villa Moreno”. Así también, los 26 pronunciamientos públicos de la organización son en relación al pedido de justicia por el injusto asesinato de sus compañeros.

En una lectura general, la totalidad de los posicionamientos de esta organización en este período retoman el pedido de esclarecimiento y enjuiciamiento a los culpables del crimen. A su vez, también establecen el contexto en que, desde su posición, se enmarca este caso: el entramado de complicidad y connivencia entre la institución policial, sectores del poder judicial y bandas de delito organizado. Como consecuencia de esta premisa, también se asume desde los diferentes posicionamientos que la presencia del Estado en los barrios periféricos de la ciudad de Rosario es una presencia corrupta a través de la policía, por lo que los jóvenes toman el primer contacto con instituciones estatales represivas. (31/12/2012)

Además, otro elemento que se logra rastrear en las fuentes de información de este período es el carácter territorial y comunitario de la organización, donde se parte de reforzar quienes eran Patom, Jere y Mono y cómo era su relación con la militancia y organización. Así se ubica el M-26 como un espacio donde la juventud “encuentra en la organización comunitaria una forma de construir identidad” (Comunicado 20/julio “Asesinaron a Facundo Osuna, joven allegado a la causa del Triple Crimen de barrio Moreno”). Esta dimensión está reforzada por los medios locales, en cuanto ubican al M-26 como agrupación territorial (La Capital. 3/01/2012; 2/03/2012; 6/01/2012) En ese sentido en diferentes noticias se resalta los proyectos comunitarios (espacios laborales y de contención social). En este trabajo comunitario aparece la juventud como un actor central tanto en los comunicados como en las noticias periodísticas, así lo expresaba Pedro Salinas –referente de la organización- en dos entrevistas para el

Ciudadano “los sicarios masacraron a tres pibes de familia que trabajaban todos los días para llevar adelante proyectos comunitarios que incluían a la juventud del barrio” (El ciudadano 03/01/2012) ; “Nosotros desarrollamos un trabajo de base en el territorio, con el fomento de la participación de los jóvenes, la apelación a su creatividad” (El ciudadano 12/01/2012)

Como mencionábamos anteriormente, el análisis del corpus permite señalar que en este año también se diversifican los vínculos con el Estado, tanto como los segmentos estatales a los que se interpelaba como las demandas que lo estructuraban. Claramente explicado por Pedro “Pitu” Salinas, militante del M-26 “el 2012, el asesinato de los pibes nos demandó de alguna manera, por lo menos esos primeros meses del 2012, empezar a tener una iniciativa, incluso hacia el Estado, que nunca habíamos discutido. Porque era evidente que no íbamos a resolver mucho (...) nada íbamos a poder hacer con la muerte de nuestros compañeros con un piquete, con un método de lucha tradicional o con una lógica de tipo más reivindicativa. (...)..también lo que fue sucediendo fue que fueron apareciendo actores que hasta entonces no teníamos en cuenta, sea el poder judicial, sea el contexto en que asesinan a los pibes que tiene que ver con el narcotráfico, sectores políticos encumbrados que hasta entonces eran inaccesibles.” (Entrevista 21/09/2015)

La sistematización de la información posibilita inferir que el interlocutor privilegiado ya no era el Ministerio de Desarrollo Social o la Gerencia de Empleo, sino que se desplaza al Ministerio de Seguridad, Ministerio de Justicia, el gobernador de la provincia y principalmente los Tribunales Provinciales. En ese sentido, las noticias periodísticas reconstruyen los múltiples acercamientos a instancias estatales: reunión con Bonfatti, el Ministro de Justicia, el de Gobierno y el de Seguridad (La Capital 03/01/2012); reunión con la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garre (El ciudadano. 11/01/2012); comisión investigadora independiente conformada por... (El ciudadano 28/01/2012), reunión con el Ministro de Seguridad (Rosario 12. 4/08/2012), reunión con el Gobernador (Rosario 12.19/08/2012)

En relación con estos datos y con el objetivo de desentrañar las relaciones con el Estado en este período, se detecta que en la mayoría de los cuerpos de los comunicados el Gobierno Provincial aparece como aquel que es incapaz de trabajar esta problemática de carácter estructural (Comunicado de Prensa M-26: 26/06/2012) y

con ausencia de políticas públicas en relación a ella (Comunicado de Prensa M-26: 01/11/2012). Uno de los reclamos fundamental hacia este actor que se detecta era el pedido del involucramiento directo y el compromiso público con la causa, sosteniendo que la postura del Gobierno Provincial era falta de voluntad política (Comunicado de Prensa M-26: 23/08/2012/ Testimonio de Salinas en La Capital. 2/03/2012/ Rosario 12 2/3/2012)

Frente a diferentes amenazas y ataques a familiares de los tres jóvenes asesinados, el Ministerio de Seguridad también aparece caracterizado por la incapacidad para planificar dispositivos de protección para los vecinos y vecinas y la comunidad barrial (Comunicado de Prensa M-26: 01/08/2012). A partir de estos hechos la demanda de protección para testigos y familiares se convierten en algo prioritario (Rosario 12 2/08/2012) Así, refuerzan en una reflexión, tomada por El ciudadano, “Fue la organización popular, el dolor encarnizado en lucha lo que permitió develar la oscura rama que hay detrás de los pibes que mueren en “ajustes”, en hechos que aparecen ajenos al negocio millonario de la droga, de la connivencia policial, del enriquecimiento ilícito de la falta o ineficacia de políticas de inclusión para jóvenes que viven en zonas postergadas” (31/12/2012).

De estas ideas hemos logrado identificar uno de los ejes explicativos que permiten el M-26 para entender las realidades territoriales y de la juventud en los barrios periféricos de Rosario: la construcción de identidad. Para ellos, los entramados del narcotráfico y las bandas organizados se ubican como una identidad posible frente al desborde de instituciones estatales tradicionalmente generadoras de identidad (El ciudadano. 26/11/2012)

Un párrafo clarificador de las relaciones con el Estado que buscaba tener desde el M-26 durante este año:

“En este marco, convencidos/as de que la lucha contra el flagelo del narcotráfico excede con creces a la tarea policial-investigativa (la mas de las veces corrompida hasta el tuétano y funcional a los intereses delictivos) y debe predisponerse a miramientos integrales, es que apoyados en la experiencia de nuestro trabajo en el territorio nos propusimos planificar políticas sociales para estrechar así nuevas formas de relacionamiento entre los Movimientos Populares y el Estado. Transitamos una experiencia interesante en este sentido con el Ministerio de Desarrollo Social de la

Provincia de Santa Fe, con quienes venimos discutiendo distintos dispositivos de intervención apuntados a generar espacios de participación para la juventud, siempre entendiendo que el resguardo de la autonomía de nuestras organizaciones respecto del Estado es el reaseguro de una vinculación que no reedite antiguos patrones de sumisión y permita desplegar nuestro trabajo sin limitaciones de ningún tipo” (Comunicado de Prensa M-26: 19/03/2012)

El análisis de esto facilita reconstruir la idea de autonomía que subyace en la organización, es decir, estar dispuestos a trabajar en conjunto pero sin permitir limitaciones de algún tipo en el trabajo territorial. Así, en una de las noticias locales se refleja esta posición del M-26 de encontrar espacios comunes de trabajo con instancias estatales: “En el mismo (encuentro con el gobernador Bonfatti) se planteó generar un equipo de trabajo para tratar la cotidianeidad del barrio, para trabajar sobre la seguridad y distintos temas sociales” (El Ciudadano.14/01/2012). En esa línea, por una parte, en este año aun persisten los ingresos mensuales de los integrantes de la organización provenientes del Gobierno de la Nación que ayudaron a sostener la estructura general de la organización. Y por otra, se crea en conjunto con el Gobierno de la Provincia el Programa Integral de Desarrollo Territorial (PIDT) que implicaba un subsidio económico en tres cuotas específicamente para el M-26 que contenía el desarrollo de los proyectos comunitarios de la organización. Se puede analizar que el PIDT fue producto de una mayor visibilización del M-26 y de nuevas instancias de negociación. Nuevamente queda reflejado una articulación con el Estado en términos de recursos que no transformaba, sino mas bien, reforzaba los pilares identitarios de la organización.

Si analizamos detenidamente las noticias periodísticas, es interesante subrayar que en este año la idea de la política estaba relacionada a los funcionarios estatales o a los gremios y no con la organización ya que se procura adjetivarla como organización social-territorial-comunitaria pero no política. Este presupuesto queda en evidencia en la nota del 6 de enero en La Capital que sostenía, al hacer referencia a una de las movilizaciones por justicias “La marcha no estuvo exenta de politización. Funcionarios, concejales, diputados y asesores de la oposición provincial además de representantes de distintos gremios se hicieron ver en el lugar”.

Con todos estos datos es factible corroborar que el 2012 se constituye como un punto de inflexión para el desarrollo de la organización y de su construcción identitaria. Sin embargo, no solamente es explicable a través del asesinato de Patom, Jere y Mono sino también por que empezaban a impactar en el M-26 cambio de contexto. En ese sentido, Florencia Maggi compartía al explicar la transformación de la organización en “el momento en el que pasa lo de los pibes también tiene que ver con que se empezaba a modificar el contexto y eso hacía que las organizaciones, hijas de 2001, que teníamos una identidad piquetera empezáramos a modificar también nuestras formas de construcciones.” (...) Eso atado a lo de los pibes nosotros empezamos a pensar otras formas de intervención en el territorio que tenían que ver con eso que decimos siempre que son los proyectos estratégicos. Proyectos de construcción a largo plazo y que transformen la realidad en lo cotidiano, la realidad del territorio en su conjunto ya no solo de la vida de determinados compañeros sino ir un poco más allá.” (Entrevistas 21/09/2015)

Desde la reconstrucción de los elementos constitutivos de este período, se puede reafirmar que el 2012 fue un año de ruptura y de transformaciones. Este momento está marcado por el contexto crítico de Rosario en relación al narcotráfico y la muerte joven que llega a su punto más sensible para la organización con la muerte de Patom, Jere y Mono. El análisis de las fuentes de información relevadas manifiesta la repercusión que estos acontecimientos tuvieron en la estructura de la organización. En ese sentido, se reconocen ciertos cambios significativos:

- el reconocimiento de la juventud como actor privilegiado
- la diversificación y multiplicación de las relaciones del M-26 con instancias estatales
- y la transformación de las formas y demandas de la “lucha”

De igual manera, en este período son identificables ciertas continuidades como: la lucha (a pesar de sus diversas formas) y la construcción territorial-comunitaria.

-2013-2014. Ante nuevos desafíos ¿Resignificación identitaria?

Con el objetivo de realizar una caracterización del último período delimitado se utilizaron los Comunicados de Prensa y las noticias periodísticas para rastrear cuáles fueron las acciones que llevó a cabo por la organización, cuáles fueron los ejes prioritarios de intervención y qué relación con el Estado acompañó estas formas de actuar.

En un primer paneo general de la información disponible sobre estos dos años se reconocen dos elementos importantes dentro del desarrollo del M-26: la continuación de la lucha por justicia por Jere, Mono y Patom – que llega a su punto más alto en el juicio oral y público a los responsables del crimen a fines del 2014- y la creación del Frente para la Ciudad Futura, herramienta electoral conjunta con el Movimiento Giros. Este recorte se refuerza al hacer una clasificación de las 71 noticias periodísticas que se nombra a la organización y a los 15 comunicados de prensa que emitió el M-26, donde 57 noticias hacen referencia al triple crimen y 9 a Ciudad Futura, quedando las 5 restantes referidas a diversas temáticas.

Como se sostenía, la lucha por el esclarecimiento y el pedido de justicia por el asesinato de Patom, Jere y Mono es un patrón de continuidad con el 2012. Así, se observa que se mantiene como eje de intervención prioritario de la organización poner en evidencia el entramado de complicidades entre las bandas relacionadas al narcotráfico, la policía (como institución articuladora y responsable del narcotráfico) y sectores del poder judicial (Comunicado de Prensa M-26: 01/01/2013; Rosario 12 05/01/2013; El Ciudadano 03/01/2014). Al poner en relación este posicionamiento con el análisis de contexto que se retomaba en el apartado anterior, queda en evidencia que la complicidad-corrupción policial es tomada, no solo por el M-26, sino por varios actores como una variable clave para entender el desarrollo del narcotráfico. Estas redes de connivencia son relacionadas por el M-26 con un “proyecto político de gestión” que no recomponen los lazos sociales y que determina ciertos ganadores y perdedores (Comunicado de Prensa M-26: 01/2013).

En relación al caso, la reivindicación específica de estos años que se identifica fue la condena a los autores materiales del hecho. Así en estos años se sostuvieron las actividades de lucha por justicia que se realizaban todos los meses. Durante el año 2014 fueron condenados las cinco personas acusadas por ser responsables del

asesinato de Patom, Jere y Mono. En Agosto de este año uno de las personas involucradas en el triple Crimen fue condenado con una pena de 8 años por participación secundaria a través de un abreviado. A su vez, en noviembre tuvo lugar el juicio oral y público en el que se juzgo a los 4 imputados restantes por el triple crimen. Este juicio a cabo el 4 de diciembre con condena para los cuatro por una cantidad de años que va desde los 24 a los 33. Paralelamente al proceso judicial que traspasaba dentro de tribunales en ese momento, la organización junto con los familiares de las víctimas sostuvieron un acampe en las puertas de allí. Esta carpa, llamada por los diarios como la “carpa del aguante”- la “carpa de la esperanza”, se lleno de vida a partir de actividades culturales, jornadas de educación y de juventud, paneles-debates y otras actividades que reflejaban el trabajo territorial de la organización.

En el análisis de estos años, se detecta como continuidad la construcción de la juventud como un actor primordial para la construcción territorial y política de la organización. En ese sentido, múltiples comunicados refuerzan la importancia de la generación de espacios que sirvan para la construcción identitaria de los jóvenes:

- “Pero también barrios donde nos chocamos a diario con cientos de Monos, Jeres y Patones, pibes que al igual que ellos encuentran en las Organizaciones comunitarias un espacio donde proyectar un futuro”. (Comunicado de Prensa M-26: 01/01/2013)

- “Hoy, sin ellos, siguen su ejemplo de lucha sus convicciones de generar una alternativa a los jóvenes en las barriadas populares. También estaremos realizando un “picadito” en la cancha, la que hace semanas estamos recuperando para reconstruir los espacios de dispersión e identidad, olvidados por los gobiernos” (Comunicado de Prensa M-26: 01/03/2013)

- “Casi dos años de fundar un Bachillerato Popular, de estampar el entrañable recuerdos de nuestros compañeros en un libro y un documental, realizado por los mismos jóvenes que decidieron organizarse para organizarse para no ser presas de esa falsa identidad de atropello que la desidia y el desinterés legaron a nuestros territorios” (Comunicado de Prensa M-26: 01/12/2013)

- “y, al mismo tiempo, profundizar nuestros espacios y proyectos de militancia en cada uno de los barrios, apostando a materializar en los territorios esa otra realidad posible; demostración acabada de que con compromiso, convicción y vocación

política, se puede eludir a la violencia como nicho estructurante de identidad para nuestros pibes (un Bachillerato Popular en el corazón de Barrio Tablada, una Rotisería Cooperativa en el mismísimo Club Oroño de Barrio Moreno tantos otros proyectos así lo testimonian)” (Comunicado de Prensa M-26: 02/09/2014)

- “se hacía igualmente imperioso consolidar y profundizar los proyectos que desarrollamos en el territorio con el objetivo de construir más y mejores espacios desde los cuales integrar los pibes, desde donde ofrecer otras formas de construcción identitaria alejados de los entornos de violencia” (Comunicado de Prensa M-26: 01/05/2014)

- “El texto, a la vez, destaca la profundización de los proyectos que la agrupación mantiene en el barrio, donde las víctimas son un símbolo de esperanza y rebeldía.” (El Ciudadano 03/01/2014)

Las ideas que se desprenden de esta selección pueden ser vinculadas con la importancia de las prácticas auto-afirmativas constitutivas de la identidad que se mencionaba en el primer apartado teórico. Retomando las palabras de Zibechi (2003) que mencionábamos en un principio, se trata de construir una forma de hacer que dignifica, de reafirmación de la identidad y subjetividad en oposición a las estigmatizaciones que suele atribuirse a algunos sujetos sociales. Sin embargo, hay un cambio sobre el cual debemos poner el acento, *aquel sujeto, que en el primer período de la organización resultaba evidente que era el trabajador desocupado, se desplaza a la juventud de los barrios periféricos de la ciudad de Rosario*. En ese sentido, se observan referencias reiteradas son la del Bachillerato Popular Tablada, escuela secundaria para jóvenes y adultos nacida en 2013, que se estructura como un espacio pedagógico y “como un nicho de identidad para muchos jóvenes del barrio que encuentran allí la posibilidad de terminar sus estudios secundarios pero, al mismo tiempo, de tener un grupo de pertenencia, un proyecto a futuro, junto a sus pares” (Comunicado de Prensa M-26: 01/04/2014)

A partir de esta hipótesis se explica el énfasis de la organización, posible de detectar en sus Comunicados de Prensa, de explicitar esa contra cara del objetivo de construcción de identidad entre los jóvenes se ve en el diagnóstico que hace la organización en cuanto a la estigmatización de los jóvenes de los barrios periféricos de

la ciudad (Comunicado de Prensa M-26: 01/01/2013; Comunicado de Prensa M-26: 05/11/2014; Comunicado de Prensa M-26: 01/04/2014).

Este recorrido por las fuentes de información permite señalar que el proceso de construcción identitaria queda ligado inevitablemente a la referencia de Patom, Jere y Mono. En relación a eso Pedro Salinas decía “Tomamos la decisión de que los pibes sean el movimiento, su cara visible, porque indiscutiblemente la imagen de los pibes se transformó en un símbolo de pertenencia para la pibada en general, para la juventud de los barrios populares donde nos interesa llegar” (Rosario 12. 30/12/2013). En ese sentido, “Jere, Mono y Patom son un símbolo de la memoria colectiva para los pibes que en cada marcha levantan la bandera con los tres rostros de sus amigos asesinados el 1º de enero de 2012” (Rosario 12. 26/12/2013)

Al avanzar en el análisis resulta evidente que, en estos años, la relación con instancias estatales disminuye considerablemente. Es por eso, que en la lectura de comunicados y noticias no se encuentran nuevas reuniones o espacios de trabajo común. Aunque, claro está, que Tribunales Provinciales siguió siendo un interlocutor privilegiado. Sin embargo, no se debe olvidar que existe una continuidad en los ingresos mensuales de los miembros de la organización que provienen del Gobierno de la Nación. Así también, junto con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe se renueva el PIDT como una ayuda económica para construir y fortalecer los proyectos comunitarios. En estos años, este proyecto estuvo inclinado a reforzar el nacimiento del Bachillerato de Tablada, la articulación con el Club Deportivo Oroño y aspectos culturales de los espacios de jóvenes.

Resulta conveniente para pensar sobre las relaciones del M-26 con el Estado destacar que el vínculo no solo está dado por instancias de encuentro sino también se construye a través de la referencia y caracterización que la organización haga de las instancias estatales. En esa línea, si se analiza la construcción del discurso que hace la organización, los estamentos gubernamentales seguían ocupando la posición de falta de voluntad del ejecutivo provincial para encargarse estructuralmente problemática (Comunicado de Prensa M-26: 02/02/2013) y como responsable de la ausencia de políticas públicas, especialmente dirigidas a la juventud (Comunicado de Prensa M-26: 01/03/2013) y de políticas direccionadas a atender a los sectores vulnerables (Comunicado de Prensa M-26: 01/02/2014)

Al vincular estos dos elementos, ellos se presentan como dos caras de una misma moneda, donde el Estado (en sus múltiples formas) no está, o esta a partir de la ineficiencia de las políticas públicas, de la falta de voluntad política o desde su lado represivo con la policía, aparece la organización con sus proyectos comunitarias a buscar crear, por fuera de los ámbitos institucionales estatales, un trabajo, una escuela, un espacio de identificación. Así decía Pedro “Pitu” Salinas, referente del M-26, para La Capital (14/09/2013) “Que se planteen estas cosas es bueno, porque tiene un trasfondo muy interesante para poder articular las políticas sociales en el territorio entre organizaciones, ya que el Estado se ha retirado del barrio y no quedan muchas instituciones referente para los pibes, que se ven arrojados a la violencia”

La otra línea de acción de esta organización en este período es el Frente para la Ciudad Futura (FCF). El FCF nace a mediados del 2013 a partir de una articulación del movimiento 26 de Junio, el movimiento Giros con trabajo territorial en Nuevo Alberdi y el Partido para la Ciudad Futura –herramienta partidaria de esta última organización. Esta alianza comienza con el propósito de incursionar en la política electoral, es decir presentarse en elecciones.

Como introducíamos, es necesario para este trabajo de investigación poner en tensión los debates políticos de las organizaciones populares con la información que se obtiene de las fuentes primarias. Para este objetivo, se intenta definir cuál es el proceso político que permite y da lugar a que una herramienta electoral sea una estrategia privilegiada dentro de un movimiento social y analizar que procesos se dieron para que sea posible revertir la apatía hacia lo institucional-estatal conocida de las organizaciones piqueteras nacidas al calor de las movilizaciones populares del 2001. Muchos autores, entre ellos Svampa (2012) ubican en el gobierno de Néstor Kirchner un punto de ruptura en cuanto se constituyó como un gobierno que sostuvo múltiples estrategias para integrar, cooptar y controlar a las organizaciones piqueteras. Es decir, nos resulta indispensable pensar al gobierno de Kirchner como una reconfiguración del escenario y no en términos de continuidad con los gobiernos de los 90, expresado en su propia retórica anti-neoliberal y acompañado por la convocatoria a construir un modelo productivista. (Svampa: 2009)

El perfil del nuevo gobierno permitió que dentro del gran mapa de organizaciones piqueteras las organizaciones con una fuerte matriz nacional y popular fueran privilegiadas en cuanto a reconocimiento y recursos (Svampa: 2009). Algunos autores analizan este trato preferencial a partir la búsqueda de consolidar las bases que le darían carnadura al “proyecto” que se abría con la asunción de N. Kirchner (Natalucci: 2011). A diferencia de esta relación, en general la actitud del gobierno con aquellas organizaciones ligadas a los partidos de izquierda o a organizaciones autónomas e independientes fue de represión y estigmatización de la protesta. Este grupo de organizaciones “sufrieron procesos de fragmentación organizacional y, en un fuerte marco de reflujo de la acción en las calles se vieron obligadas a revisar sus estrategias de intervención política.”(Svampa: 2009: 242).

Frente a este complejo escenario muchos autores han pensado estos años cómo un proceso de “institucionalización e integración” de las organizaciones.

Otro de los puntos a destacar del cambio que se da a partir del 2003 es que las organizaciones populares necesariamente debían repensar sus estrategias de intervención, con un Estado que crecía en legitimación, una economía que se “estabilizaba” ya no era posible (o productivo políticamente) seguir interviniendo de la misma manera.

En este contexto, el tema de la incursión electoral empezó a tomar protagonismo en las agendas internas de debate de las organizaciones sociales. Uno de los grandes nudos conflictivos que han atravesado las organizaciones populares al respecto era cómo ocupar lugares institucionales sin perder la coherencia con los trabajos de base y con las propias formas de organización y toma de decisiones. En ese sentido, Cieza – teórico y militante de diversas experiencias de organización popular- asume las distintas experiencias de incursión en el gobierno/lo electoral han permitido vislumbrar algunas conclusiones al respecto. Una de las síntesis que este autor identifica es que los movimientos populares con una genuina construcción territorial han experimentado en los ámbitos institucionales pero que siempre la posibilidad de esto está circunscripta a que los movimientos mantengan su autonomía. En ese sentido, establece que la posibilidad de articulación de las herramientas electorales con los movimientos sociales son diversas: el movimiento político asumía como propio

el programa de los movimientos sociales, el movimiento político se gestaba a partir del movimiento social o el movimiento político y social se fundían.

Otro de los grandes debates que atravesaban la discusión en torno a la participación en espacios institucionales es el dilema de las formas organizativas. Mientras que los movimientos sociales nacen promoviendo y teniendo como bandera una forma que promueva la horizontalidad en la forma de organización y toma de decisiones, los partidos políticos tradicionalmente, e incluso legalmente, tiene una forma organizativa vertical-piramidal. Frente a este escenario, ¿cómo se conjugan dos lógicas diferentes de construcción y de organización?

Podemos decir, que en el marco de un cambio de época, las transformaciones en las políticas del gobierno nacional, la apertura y reconversión de los debates dentro de las organizaciones sociales en relación a la participación institucional fueron puntapiés para la experiencia que trabajamos en esta investigación.

¿Del barrio al concejo? Estos debates y maneras de “re pensar” el Estado y lo institucional orientan al Frente Popular Darío Santillán, como organización social, a no quedar afuera de las discusiones en torno a la participación institucional-electoral. Estos debates y procesos de discusión dieron lugar a que en el año 2013 en un Plenario Nacional -instancia máxima de decisión- de esta organización declaren: “Hoy desde el Frente Popular Darío Santillán hemos decidido dar la pelea también en el ámbito electoral como un plano más de disputa hacia ese proyecto popular de transformación. (...)Por eso hoy comenzamos a aportar en la construcción de una alternativa político-electoral desde abajo, que nos convoque a participar, a realizar nuestro propio destino” (Frente Popular Darío Santillán: 2003: 132). En esta misma declaración, se pone énfasis en el cómo hacer esta incursión electoral.

Una lectura detallada de estos documentos, permiten reconocer que dentro de las características necesarias para caminar estas experiencias se presentaba la continuidad de los principios y valores del movimiento social (democracia de base, protagonismo popular y de referentes populares). En ese sentido, la definición de participar en elecciones estaba limitada en ámbitos locales donde las construcciones de base pudieran dar sustento y garantía a estas condiciones (Entrevista a Pedro Salinas y Florencia Maggi: 21/09/2015)

En relación al objetivo que estructura esta investigación nos interesa observar cómo se materializa esa definición en la ciudad de Rosario teniendo como protagonistas al Movimiento 26 de Junio y al Movimiento Giros. Al investigar qué debates atravesaban al M-26 para tomar la decisión de avanzar en la participación electoral Pedro Salinas lo enmarca necesariamente en un proceso de larga data: “El debate de la exploración institucional o el debate de lo electoral en el Frente Darío Santillán ya existía de cuando nosotros éramos Surastilla por eso te digo que el debate parece mucho más largo de lo que nosotros a veces creemos.”(Entrevista21/09/2015)

Sin embargo, al pensar específicamente cuáles fueron los impulsos determinantes que dieron lugar a la decisión del M-26 el militante los resumía en dos hechos. “En el medio estuvo lo de los pibes, en el medio estuvo. Eso que decíamos, nosotros en un nivel de exposición y en un lugar que quedamos de exposición pública interesante quizá hasta con un mensaje interesante que no venía siendo atendido en la ciudad de Rosario. Ahí quizá nosotros tuvimos un costado de gravitación que nos impulsó, en parte, a considerar el camino y la posibilidad de lo electoral. Digo en parte porque la otra gran mitad fue el hecho que este Giros con un partido político ya casi terminado y decir bueno, el ofrecimiento concreto de nos sumamos a esto.” (Entrevista21/09/2015)

Como se mencionaba, el Frente para la Ciudad Futura nace en 2013 y en ese año hace su primera incursión electoral en la categoría Concejal de la ciudad de Rosario. Los principales candidatos eran dos referentes de las organizaciones territoriales: Juan Monteverde por el movimiento Giros y Pedro “Pitu” Salinas por el M-26. En estas primeras elecciones, el frente electoral logró obtener 18.500 votos.

Lo que se resalta en el análisis de las noticias periodísticas y en los comunicados del M-26 en relación al FCF es fundamentalmente esa matriz movimientista y territorial de esta nueva experiencia. (Gacetilla FCF: 03/2013, El ciudadano. 21/10/2013, Rosario 12. 17/03/2013). En la entrevista con militantes del M-26, ellos enfatizaban la forma en la que se había dado la campaña del 2013. De esta manera, se ha detectado que la territorialidad de las organizaciones, los proyectos construidos han sido los temas recurrentes en la campaña llevada adelante por los militantes. En consonancia, Pedro Salinas y Florencia Maggi –militantes del M-26- remarcaban que uno de los puntos de encuentro entre las organizaciones que componen al FCF es tener la capacidad para

dar debates estructurales desde la práctica territorial prefigurativa. En el caso de Giros, anclados en la experiencia de construcción de un Tambo, dar la discusión en relación a la especulación inmobiliaria y los barrios privados y en el caso del M-26, a partir de la lucha por justicia por Jere, Mono y Patom, el debate en relación a la seguridad pública, el narcotráfico y las muertes jóvenes en los barrios periféricos de la ciudad.

Para Pedro Salinas, hacer una campaña desde los trabajos prefigurativos les permitía alejarse del lugar tradicional de la promesa y como sustento de este enunciado ejemplificaba “la campaña electoral nuestra decía esto Ciudad Futura impugna esto, la gestión cultural del socialismo. Bueno, para mostrarlo tiene el D7. Es decir, el aspecto del sistema que impugnamos tenemos la alternativa superadora para mostrarlo. Ciudad Futura impugna la manera en la cual piensa la justicia el socialismo, Ciudad Futura tiene esta experiencia de construcción de Justicia para Patom, Jere y Mono que la llevó adelante de esta manera. Ciudad Futura piensa que la educación gestionada por el socialismo es un instrumento agotado, bueno Ciudad Futura tiene estas dos experiencias en territorio para demostrar que hay otra forma de gestión de la educación posible.” (Entrevista 21/09/2015)

Desde una lectura general de las fuentes de información se observa cómo se empieza a caminar más fácilmente, para el sentido común y periodístico, la nominación de espacio político, alternativa política para referirse al M-26. Así Rosario 3 decía, con respecto al lanzamiento del FCF, que nacía “una nueva fuerza política en la ciudad”, “una nueva izquierda territorial que tenía su fortaleza en los movimientos con militancia en el barrio que apuesta a “participar en la “política formal”” (03/2013). Es decir, una vez que la organización es parte de una herramienta electoral, forma tradicional de organización política- el partido-, resulta más sencillo ubicarlo por diferentes diarios como una alternativa política. Así una forma de nominar al M-26 de parte de los diarios locales empezó a ser como una “agrupación política” (El Ciudadano 4/12/2014; La Capital 4/07/2014)

En sintonía, encontramos en este período un auto-reconocimiento de presentarse como un proyecto político, con arraigo en el trabajo territorial, que se propone construir “una nueva cultura política de izquierda” (Comunicado M-26 “El mega-operativo y sus adyacencias. Un antes, un después y... ¡un ahora!” Abril 2014; Comunicado M-26 “A 28 meses del Triple Crimen de Villa Moreno” Mayo de 2014).

También, al articular los diferentes datos disponibles se puede inferir que este reconocerse en un ámbito más amplio que el barrial implicó empezar a posicionarse y elaborar propuestas de políticas públicas desde las construcciones propias de las organizaciones. Ejemplo de este nuevo terreno es la propuesta de la Ley de Víctimas que busca crear un soporte legal para una atención integral (legal, económica, psicológica) a las víctimas, la gran misión anti-inflación –una propuesta de mercado que disminuya y/o elimine la intermediación entre productores y consumidores- y una ley de club social y cultural para reglamentar espacios culturales nocturnos.

En esta nueva experiencia también se presenta la necesidad de mantener la autonomía en este terreno (El ciudadano. 21/10/2013). Así Florencia Maggi ligaba la construcción de los proyectos en territorio con el sostén de la autonomía, “me parece que era también un poco la idea desde que nosotros empezamos a pensar, digo nosotros todas las organizaciones del frente, la participación en lo electoral pensamos cómo puede ser eso realmente distinto y como podía construirse desde esa autonomía que nosotros pregonábamos, digamos desde la construcción de base en el territorio (...)y ahí construir un instrumento nuevo, distinto que intervenga en lo institucional de manera distinta.”

Este nuevo desafío asumido por el M-26 tuvo su punto máximo en el 14 de Junio del 2015 donde 90 mil votos en las elecciones provinciales le permitieron a Ciudad Futura acceder a tres bancas del concejo.

Este último período refleja claramente una transformación en la estructura del M-26 que se expresa en:

- la diversificación de sus acciones de lucha
- en la diversificación de los objetivos
- la modificación y complejidad de la relación con el Estado (como lugar válido para la disputa política a través de las elecciones, como fuente de recursos para sostener los proyectos comunitarios, como el responsable de la falta de políticas públicas en relación a juventud)

Sin embargo, muchas de las características que determinaban a la organización como parte de un movimiento social persistían. Como lo diría Pedro “Pitu” Salinas el M-26 en el año 2014 era “un movimiento social y político tal cual el 2010 que fue ganando en

conciencia estatal.” (Entrevista 21/09/2015) Esta afirmación es respaldada por el análisis de que el contexto ha cambiado con el correr de los años y también el Estado (en sus múltiples dimensiones) que se posicionaba frente a las organizaciones sociales y populares. A pesar de esta observación, se rescata que las peculiaridades propias de la organización social como el trabajo territorial persisten en estos años.

Reflexiones finales.

Este recorrido por los estudios de los movimientos sociales, del movimiento piquetero en Argentina y del caso del Movimiento 26 de Junio, nos deja, en primer término, la seguridad de que las identidades son procesos no estáticos que se redefinen en el vínculo con el otro y con el contexto.

En ese sentido, rastrear las características identitarias del M-26 en los distintos períodos fue un trabajo de ida y vuelta entre los datos obtenidos de las noticias periodísticas y los comunicados y los análisis de contexto.

Se partió de identificar las características principales del movimiento piquetero en el nacimiento de la organización. Tal como se esperaba, se reconoció en los años 2010-2011 una identidad forjada mediante la acción directa en forma de piquete con reivindicaciones de índole económica englobadas por la demanda estructural del trabajo (expresada en demanda por alimentos, extensión de planes sociales). Otras de las características resultantes del análisis de este período es la forma de organización asamblearia, la construcción territorial y la relación conflictiva con los estamentos estatales que implicó una demanda de ciertos recursos y el rechazo a su forma de representación y organización.

A su vez, lo ocurrido en 2012 y la información de las fuentes de información nos permitieron reflexionar acerca de cómo un acontecimiento trágico –la muerte de tres integrantes del M-26-, que en algún punto impacta en lo “subjetivo” y afectivo de la organización, se convierte en un disparador para repensar los ejes de intervención y las formas de organización y en un pilar definitorio para la identidad de la organización.

Uno de los descubrimientos que permite el repaso por el 2012, fue identificar que las relaciones con el Estado se diversificaron y se multiplicaron en cuanto empezó a ser necesario –por el reclamo de justicia- establecer esos nuevos canales, y en cuanto el nuevo eje de acción precisaba construir vínculos diferentes y con otros estamentos estatales.

De alguna manera, la inclinación a una nueva configuración de las estrategias y formas de acción se profundiza en el último período analizado. Al entender los cambios en 2013-2014 de esa manera, es posible unir la lucha por justicia, la creación del Frente Ciudad Futura y el Bachillerato Popular en una misma forma de pensar la

construcción identitaria de la organización. Claramente en estas formas de acción queda materializada la consideración sobre el Estado que no se presenta, como en los orígenes del movimiento piquetero, como algo totalmente opuesto y como un terreno sobre el cual no había que intervenir directamente. Considerando esto se debe enfatizar que ha persistido una forma de vinculación con lo estatal: la obtención de recursos de los diferentes niveles estatales para el sostén del ingreso de los miembros de la organización y para el fortalecimiento de los proyectos territoriales.

Con el objetivo de responder a aquellos interrogantes y objetivos que dieron lugar a esta investigación, se ha buscado desentrañar cuáles son los pilares identitario. Así, la construcción territorial de espacios comunitarios es uno de los elementos que persiste y se erige con más fuerza al correr de los años. En un primer momento se refleja en los comedores, copas de leche, cooperativas de trabajo. Y luego se complementa con espacios de jóvenes, recuperación de un Club Deportivo del barrio, una escuela secundaria para adultos. Y se condensa en una forma de hacer una campaña electoral sostenida y visibilizando las construcciones en los territorios.

Además, un eje que se reconoce como permanente es la idea de la “lucha” como forma lograr transformaciones. Ahora bien, el desarrollo de esta investigación puso de relieve que las maneras de entender la lucha y de construirla son diversas, está representada en un piquete en el 2010, o en un marcha en el 2012 o en la presentación de un libro.

En un análisis, que tal vez resulta más, se encuentra el núcleo de la identidad de la organización que persiste en el tiempo a pesar de los cambios de eje, estrategia y relaciones con el Estado. El Movimiento 26 de Junio esta caracterizado por sostenerse en las prácticas autoafirmativas (Zibechi: 2003) que permiten desde un hacer específico la construcción de una identidad positiva que se contraponga con las estigmatizaciones al que el sujeto protagonista de la organización estaba supeditado. Para mayor claridad, en un primer momento se trababa redefinir al desocupado como piquetero a través del trabajo en cooperativas, en comedores comunitarios y la acción directa. Y en un segundo momento, se buscaba superar la estigmatización de los jóvenes de los barrios periféricos de la ciudad mediante la referencia a la juventud organizada, al ejemplo de la práctica de Patom, Jere y Mono y a los jóvenes que participan del Bachillerato Popular.

Es decir, la identidad de la organización se fue transformando de manera procesual a partir de sus prácticas pero también de manera reactiva frente al contexto y discursos hegemónicos.

Estos elementos nos llevan a repensar la idea de que la identidad piquetera como tal haya desaparecido y establecer que son reconfiguraciones, “vueltas de tuerca” o diferentes matices de una identidad que se sostiene, tal vez con otros nombres y otras denominaciones. Esta investigación ha permitido establecer que los procesos identitarios son dinámicos, que aunque se influyen por el contexto y por la relación con los distintos actores (estatales, comunitarios) no dependen de esto en su totalidad; sino que refieren al lugar desde donde se parte para pensar la organización social y los procesos de transformación.

IV. Bibliografía

- ✓ Bonifacio, José Luis (2011) *“Protesta y organización: los trabajadores desocupados en la provincia de Neuquén”*. El Colectivo. Buenos Aires.
- ✓ Calderón, Fernando y Jelin, Elizabeth (...) *“Clases y movimientos sociales en América Latina: perspectivas y realidades”*. Centro de Estudios de Estado y Sociedad. Buenos Aires.
- ✓ Casquete, Jesús (2006) *“El poder de la calle. Ensayos sobre acción colectiva”*. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid.
- ✓ Chiroleu, Adriana; Voras, Claudia; Delfino, Andrea y Nogueira, María Elena (2014) *“Reconfiguración social y productiva en la Posconvertibilidad: una caracterización en la provincia de Santa Fe”*. III Jornadas Nacionales sobre estudios regionales y mercados de trabajo. Universidad Nacional de Jujuy y Red SIMEL. San Salvador de Jujuy.
- ✓ Cieza, Guillermo H (2011) *“Borradores sobre la lucha popular y la proyección política”*. El Colectivo. Buenos Aires.
- ✓ Club de Investigaciones Urbanas (2013) *“Rosario arde, a pura adrenalina arde”*. En línea, consultado el 16 septiembre 2015. URL: <http://es.scribd.com/doc/143237584/Club-de-Investigaciones-Urbanas-Rosario-Arde-A-Pura-Adrenalina-Arde#scribd>
- ✓ Crucella, Carlos y Robin, Silvia (2014) *“Economía y Política en el Gran Rosario 2003-2011”*. En: Crucella, C., Robin, S. (Coeditores), *“Sociedad, economía y política en la Región del Gran Rosario (2003-2011)”*. Ediciones DelRevés. Rosario.
- ✓ Cortés, Martín (2008) *“Movimientos sociales y Estado en Argentina: entre la autonomía y la institucionalidad”*. Programa Regional de Becas CLACSO. Disponible en: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/2008/gobpro/cortes.pdf>
- ✓ Dinerstein, Ana C.; Contartese, Daniel y Deledicque, Melina (2010) *“La ruta de los piqueteros. Luchas y legados”*. Capital Intelectual. Buenos Aires.

- ✓ Documedia Periodismo Social Multimedia (s/f) *“Calles Perdidas. El avance del narcotráfico en la ciudad de Rosario”*. En línea, consultado el 17 septiembre de 2015. URL: <http://www.documedia.com.ar/>
- ✓ Frente Popular Darío Santillán (2013) *“Breve historia del Frente Popular Darío Santillán. Selección de documentos 2000-2013”*. Área de formación del Frente Darío Santillán. Buenos Aires,
- ✓ Iglesias, Esteban (2009) *“Pensar la protesta en la Argentina Democrática”*. Revista Temas y Debates. Número 17. Buenos Aires.
- _____ (2010) *“Democracia y protesta social: los orígenes de la protesta piquetera en la ciudad de Rosario”*. Laborde Libros Editor. Rosario
- _____ (2012) *“Origen y transformación de la CCC en Rosario”*. Trabajo y Sociedad. Nº 19. Santiago del Estero. Disponible en: <http://www.unse.edu.ar/trabajosociedad/19%20IGLESIAS%20identidades%20politicas%20CCC%20Rosario.pdf>
- _____ (2012) *“Partidos políticos y movimientos sociales. Modalidades y transformación de la acción política durante el siglo XX”* En: Elección. V. 11, n.º 12. Disponible en: <http://www.saludcolectiva-unr.com.ar/docs/SC-252.pdf>
- _____ (2012) *“De la colonización de la sociedad civil a las tensiones entre partidos en el gobierno y movimientos sociales”*. Lua Nova. Nº 87. San Pablo. Brasil.
- ✓ Melucci, Alberto (1999) *“Acción colectiva, vida cotidiana y democracia”*. Ed. El Colegio de México. México.
- ✓ Natalucci, Ana (2012) *“Entre la movilización y la institucionalización”*. Polis [En línea], consultado el 20 abril 2015. Disponible en: <http://polis.revues.org/1448>
- ✓ Rocchi, Graciela y Ferri, María Noel (2013) *“La ciudad de Rosario en contexto: debates en torno a las prácticas socio-políticas de los sectores vulnerables y las acciones del Estado entre los años 2008-2011”*. En: Rocchi, G. (compiladora), *“Saliendo del barrio”*. Laborde Editor. Rosario
- ✓ Scribano, Adrián (2009) *“Acciones colectivas, movimientos y protesta social: preguntas y desafíos”*. Conflicto Social. Año 2, Nº 1. Buenos Aires.
- _____ (1999) *“Argentina cortada: “cortes de ruta” y visibilidad social en el contexto de ajuste*. En: *“Lucha Popular, democracia, neoliberalismo:*

- Protesta Popular en América Latina en los Años del Ajuste*". Margarita López Maya Editora. Nueva Visión. Venezuela.
- ✓ Seoane, José; Taddei, Emilio y Algranati, Clara (2006) *"Las nuevas configuraciones de los movimientos populares en América Latina"*. En: Boron, A. A.; Lechini, G., *"Política y movimientos sociales en un mundo hegemónico. Lecciones desde África, Asia y América Latina"*. CLACSO. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Buenos Aires.
 - ✓ Seoane, José; Taddei, Emilio y Algranati, Clara (2008) *"El concepto 'movimiento social' a la luz de los debates y la experiencia latinoamericana recientes"*. En: González Casanova, P. (coord.), Proyecto *"Conceptos y fenómenos fundamentales de nuestro tiempo"*. UNAM. México.
 - ✓ Stratta, Fernando y Barrera, Marcelo (2009) *"¿Movimientos sin clases o clases sin movimiento?"*. Conflicto Social. Año 2, N° 1. Buenos Aires.
 - ✓ Svampa, Maristella (2012) *"Cambio de época. Movimientos sociales y poder político"* (2ª ed). Siglo Veintiuno Editores. Buenos Aires.
 - _____ (2008) *"Movimientos Sociales, matrices socio-políticas y nuevos escenarios en América Latina"*. I Jornadas de Análisis Crítica. Universidad del País Vasco.
 - ✓ Svampa, Maristella y Pereyra, Sebastián (2009) *"Entre la ruta y el barrio: la experiencia de las organizaciones piqueteras"* (3ª ed). Biblos. Buenos Aires
 - _____ (2006) *"La política de los movimientos piqueteros"*. En: Shuster, F. *"Tomar la palabra"*. Prometeo. Buenos Aires.
 - ✓ Tarrow, Sidney (1998) *"El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política"*. Alianza Editorial. Madrid.
 - ✓ Touraine, Alain (1995) *"Producción de la Sociedad"*. Universidad Nacional Autónoma de México e Instituto Francés de América Latina. México.
 - ✓ Tzeiman, Andrés (2013) *"Estado y desarrollo en América Latina: dilemas y debates de las ciencias sociales latinoamericanas en el posneoliberalismo (2006-2012)"*. CLACSO. Buenos Aires. Disponible en: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20131016123041/Tzeimaninformeoctubre2013trabajofinal.pdf%22>

- ✓ Yates, Caitlyn (2014) *"El crecimiento de narcotráfico en Rosario: violencia disciplinada y la resistencia social frente a este sistema"*. Independent Study Project (ISP) Collection. Paper 2005.
- ✓ Zibechi, Raúl (2003) *"Genealogía de la revuelta. Argentina, la sociedad en movimiento"*. Letra Libre. La Plata, Buenos Aires.